



TOLIMA

Análisis de conflictividades y construcción de paz



TOLIMA:

Análisis de conflictividades y construcción de paz



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD

Fabrizio Hochschild
Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo - PNUD

Arnaud Peral
Director de País

Inka Mattila
Directora adjunta

Alessandro Preti
Coordinador del Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación

Jenny Galvis
Coordinadora territorial de Tolima y Meta

Olga González Reyes
Asesora de Análisis



Investigador
José Jairo González Arias.

Coinvestigador
Camilo Ernesto Gómez Alarcón



Las opiniones y planteamientos expresados no reflejan necesariamente las opiniones del PNUD, su junta directiva, ni los Estados miembros.

El análisis que se presenta a continuación se basa en la metodología “Análisis del desarrollo relacionado con el conflicto” (Conflict-related Development Análisis - CDA, por su sigla en inglés), herramienta preparada por la Dirección para la Prevención de Crisis y la Recuperación del PNUD (Bureau for Crisis Prevention and Recovery (BCPR), utilizada en diferentes países del mundo.

Mayo 2015

CONTENIDO

Presentación	5
Introducción	7
Capítulo 1: Configuración territorial y análisis de conflictividades.	11
Territorio y cultura	13
El Líbano y el norte del Tolima	15
Ataco y la puerta al sur	15
Economía regional	16
La tierra y los usos del suelo	18
La Agricultura	20
Cambios en usos del suelo: La locomotora minero energética.	23
Capítulo 2: Dinámica del conflicto y la construcción de paz territorial	25
Territorialización del conflicto en el Tolima	26
Los efectos del conflicto	29
Desplazamiento	29
Otros hechos Victimizantes.....	31
Despojo de Tierras en el Tolima	32
Capítulo 3: Análisis de intervenciones y respuestas de los principales actores regionales.	35
Capítulo 4: Conclusiones	45
Bibliografía	51

Presentación

El departamento del Tolima ha ocupado un lugar central en la historia nacional en su política, en su economía y en la trayectoria del conflicto armado. Por un lado, desde la colonia, cuando la región fue habitada por pueblos indígenas como el Pijao, el Pantágora o el Coyaima, quienes se encontraron hacia 1537 con el paso de Sebastián de Belalcázar, Andrés López de Galarza y Francisco de Trejo. Luego, el tránsito de población y mercancía entre Cartagena y la ciudad de Santa Fe de Bogotá se hizo mediante el río Magdalena, donde el Tolima -con los puertos de Honda y la Dorada¹- fue capital comercial. Posteriormente, durante el siglo XIX, el departamento fue escenario de las numerosas guerras civiles y más tardes, de los conflictos agrarios y la confrontación bélica del siglo XX, prolongados hasta la fecha.

Este análisis, con su proceso de investigación y los talleres que se realizaron en diferentes municipios, ha sido promovido por el programa *Alianzas territoriales para la paz y el desarrollo* del PNUD, y está enfocado en retratar el panorama de conflictividad

contemporáneo, desde el conflicto armado que habita la cotidianidad hasta los conflictos territoriales recientes que de manera recurrente involucran a la población y proponen nuevos escenarios para la construcción de paz.

Para llegar a los hallazgos que se presentan, el proceso del análisis estuvo compuesto por un acercamiento al estado del arte sobre el tema en la región, de manera particular teniendo en cuenta las recientes construcciones del Centro Nacional de Memoria Histórica, los análisis del Centro de Estudios Regionales del Sur – CERSUR-, las compilaciones del Manual de Historia del Tolima, los informes del PNUD sobre las regiones, los informes de los Encuentros Regionales para la Paz -en especial el 8 encuentro realizados en Chaparral, sur del Tolima-, los trabajos de la Misión de Observación Electoral, así como los documentos producidos por la FIP y la Vicepresidencia de la República, entre otros.

Posteriormente se realizaron procesos de investigación de campo en municipios, donde se interactuó con el saber local, haciendo uso de herramientas como las entrevistas semiestructuradas, los grupos focales y las entrevistas a profundidad. Este fue el primer paso para realizar talleres locales a donde se llevaron los hallazgos preliminares y se pusieron a dialogar en espacios

¹ Hay que recordar que el departamento de Caldas nació mediante la ley N° 17 del 11 de abril de 1905.

multisectoriales, lo que nutrió los elementos de la investigación las conclusiones que acá se exponen.

En el primer capítulo se hace una breve descripción de algunos aspectos geográficos determinantes para entender su proceso de configuración territorial, haciendo mención a la relación entre espacio, cultura e historia. Esto ayuda a ubicar espacialmente los puntos geográficos sobre los que se centrará el análisis sobre el municipio del Líbano en el norte del departamento; Ibagué, que interpreta lo regional pero que retrata el centro, y Ataco, que abrirá una ventana al sur. Esta caracterización permite regionalizar el conflicto social y armado, indicando al mismo tiempo sus dinámicas, los actores, las posibilidades de paz y los efectos en la población civil.

En el segundo capítulo se aborda la dinámica del conflicto en la perspectiva de la construcción de la paz territorial. Se resaltan los esfuerzos realizados desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz por incorporar el concepto de paz territorial para la comprensión de la dinámica del conflicto, las demandas regionales y las capacidades territoriales de construcción de paz. Así mismo, partiendo de la territorialización de los conflictos en el departamento, se presentan los efectos de éste sobre la población, particularmente en función de la sistemática violación de los derechos humanos y el abandono y el despojo de tierras.

Como se verá, la variabilidad de sus conflictos se asocia también a la organización de sus recursos productivos y formas de

economía, desde las economías campesinas e indígenas, hasta las asociadas a la gran hacienda, los cultivos agroindustriales, los monocultivos y los megaproyectos minero-energéticos, hídricos y viales. De igual modo, depende de los niveles de inserción de las subregiones con la economía nacional y mundial y del grado de articulación y relaciones de las subregiones con la institucionalidad regional y nacional.

En el cuarto capítulo se presentarán lecturas desde actores regionales fundamentales, como son los gremios productivos, las organizaciones sociales, la institucionalidad y los partidos políticos. Las áreas sobre las que versarán serán tan variadas como las percepciones del conflicto en cada uno de los sectores mencionados y pasarán desde visiones económicas asociadas a las posibilidades de la productividad y competitividad y al modelo de desarrollo, hasta visiones sociales enraizadas en la garantía y el goce efectivo de derechos, pasando por las percepciones políticas ligadas a la pulcritud del ejercicio público y finalmente los conflictos ambientales derivados del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables. Todo teniendo como crisol el conflicto armado interno y las iniciativas de construcción de paz en la región.

En el quinto capítulo se hace una presentación de las principales conclusiones y con estas las principales estrategias de intervención que deben ser tomadas en cuenta para poder intervenir institucionalmente en tiempos de transición hacia la paz.

Introducción

En la actual coyuntura política, marcada por los esfuerzos que desde La Habana se hacen en la perspectiva de poner fin al conflicto armado interno, la región Surcolombiana cobra una especial importancia tanto en la geopolítica de la guerra como en la de construcción de la paz. Sin duda todo lo que acontece en la macroregión sur afecta significativamente el clima de la guerra y la paz del país.

El departamento del Tolima se debate, de acuerdo con la regionalización planificada, como parte del “Centro” geográfico colombiano o como parte del llamado eje articulador de la vía hacia el Pacífico colombiano, por el puerto de Buenaventura. No obstante, por el valle interandino que comunica las cordilleras central y oriental, se conecta con el llamado Piedemonte amazónico, con su indudable conexión con el centro del país y la necesidad nacional de integración continental por vía terrestre, por el complejo vial que recorre desde el norte del país hasta la frontera de Nariño y Ecuador. Estas dos mega estructuras de conexión atraviesan el departamento de oriente a occidente y de norte a sur, respectivamente.

Las transformaciones en la región durante el siglo XX estuvieron relacionadas especialmente con los cambios en las formas de

producción agropecuarias. El cultivo del café, que vinculó al país con la economía internacional a través de las exportaciones dolarizadas, hizo de la hacienda, forma productiva predominante hasta el momento, especialmente en el valle interandino, una estructura ineficiente para el aprovechamiento de las tierras templadas y frías que se ubicaban sobre las cordilleras central y oriental. Así, múltiples colonos de diversas partes del país, especialmente de Antioquia, Cundinamarca y Boyacá, colonizaron los baldíos del Tolima, invadieron haciendas previamente adjudicadas que no eran explotadas en su totalidad, hicieron fundo en las laderas de las montañas y se emprendió la empresa agrícola más ambiciosa en el país para la época.

A partir de los años 30 ya podrían observarse cuáles serían las subregiones que hoy conforman al departamento: primero, la subregión Norte, heredera de las formas coloniales que se ubicaron en Honda, Mariquita y Ambalema y del crecimiento y expansión posterior, producto de la colonización antioqueña que se ubicó en la cordillera central sobre los municipios de El Líbano, Murillo, Santa Isabel y Villahermosa. Segundo, el Centro del departamento, que tuvo como protagonistas a Ibagué y el Espinal, que en la actualidad son los de mayor representación demográfica y que en su momento impulsaron nuevos canales de comunicación con el

centro del país y con el Sur del Tolima. Una tercera subregión, la Oriental, compuesta por municipios de ladera especialmente como Icononzo y Villarrica, Prado, Dolores y Alpujarra, que forman una frontera de comunicación con el centro del país, al igual que con los llanos orientales y el departamento del Huila. Luego florecería rápidamente la subregión del Sur del Tolima, ligada principalmente a la colonización de grandes extensiones de tierra baldías, alejadas geográficamente de la capital del país y que en parte seguían siendo habitadas por naciones indígenas de extenso número, tanto en el valle de inundación del Magdalena como en la frontera con el Cauca, sobre la cordillera central, en el municipio de Chaparral.

Sobre estas regiones circuló el conflicto social y armado desde las guerras civiles del siglo XIX hasta el actual conflicto armado. Las razones, con matices y variaciones están ligadas a una concepción del Estado y con este a una forma de acceder a los recursos nacionales y al poder. Así, en el primer momento podemos pensar que el debate existente se ubicaba entre partidarios Conservadores y Liberales, en disputa por el poder político nacional y con este por las formas administrativas regionales. Un segundo momento, caracterizado por la disputa por el acceso a la tierra entre hacendados y trabajadores sin tierra y por la posibilidad de involucrar a grandes grupos poblacionales en la adjudicación de baldíos para hacer posible que el campesino contara con formas de economía familiar y que se vincularan al mercado nacional, mediante cultivos de café y caña especialmente. El tercer momento del conflicto fue de violencia organizada por grupos guerrilleros: por un lado el movimiento indígena Quintín Lame que hizo del asunto étnico su escenario reivindicativo, por el otro la guerrilla de las Farc-ep y el ELN que disputaba no solo la tierra para los campesinos y el acceso a derechos, sino un espacio de poder y participación en la política nacional, regional y local.

A partir de la década del 90 la violencia por causa del conflicto armado se profundizó en el departamento, motivada especialmente por la incursión, expansión y consolidación del paramilitarismo organizado en las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, el Bloque Centauros y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.

En efecto, con la creación del Frente Omar Isaza y el Bloque Tolima las estructuras paramilitares toman fuerza importante en el departamento y, sobre todo, hace de la región norte un fuerte militar en donde lograron ganar terreno importante a las guerrillas del ELN y las Farc-ep. Esto hizo que para el año 2004 gran parte del territorio comprendido entre Murillo y Lérica y parte del sur y el plan del Tolima se convirtieran en corredores de fuerte control paramilitar. A estos hechos se debe sumar la ruptura de la Zona de Despeje, nacida en los diálogos de paz

entre el gobierno Pastrana y las Farc-ep, escenario después del cual la guerrilla se despliega por gran parte del país y el Ejército Nacional, fortalecido después del periodo de diálogos, aplica la estrategia de “Seguridad Democrática”, que profundizó la guerra contrainsurgente. Este contexto de escalamiento del conflicto explica que durante el periodo comprendido entre 2001 y 2010 se presente, como se mostrará más adelante, los más altos índices de violencia y victimización.

Estas acciones no han significado, por supuesto, la desaparición de los grupos paramilitares que operaban en el departamento, pues según se ha podido constatar existe presencia de Los Rastrojos y Los Urabeños, entre otros grupos de menor tamaño, y el resurgimiento de supuestas estructuras paramilitares como el llamado Héroes del Valle, en el sur del departamento (Ataco y Coyaima). Al mismo tiempo se registra actividad importante de las Farc-ep, que hacen presencia por los menos con 14 estructuras divididas en frentes, columnas móviles, compañías móviles y comisiones especiales. Adicionalmente, la guerrilla del ELN mantiene una presencia esporádica en el departamento, ligada a dos frentes que actúan en el norte y centro geográfico.

Vale la pena resaltar que desde los 90 del siglo pasado y hasta los primeros tres años del presente siglo, la trama de conflictividades y violencia estuvo asociada con el cultivo, procesamiento y tráfico de amapola, especialmente en el corredor suroriental y suroccidental del departamento y sobre el cual, tanto las Farc-ep como los paramilitares desarrollaron una recurrente disputa por el control territorial, disputa que victimizó a la mayoría de la población campesina e indígena del territorio.

La respuesta estatal para la recuperación del control territorial se centra en la aplicación del Plan Nacional de Consolidación, con la territorialización del Plan de Consolidación en la Cordillera central. Para la recuperando de parte del control territorial, predominantemente se ha recurrido a estrategias militares como la denominada Espada de Honor del Ejército Nacional -que tiene como objetivo reducir a la mitad de sus fuerzas las tropas y frentes en particular de las Farc-ep y ELN- y la estrategia Corazón Verde, de la Policía Nacional, que busca contrarrestar las llamadas bandas postdesmovilización o bacrim y los grupos de crimen organizado y de delincuencia común (DNP, 2013).

El departamento del Tolima tiene formas diferenciadas de violencia y, con esto, afectaciones diversas en los derechos humanos, hechos que tienen su origen en la presencia estatal diferida según los territorios, distintos niveles de consolidación gubernamental, existencia de órdenes de poder alternos, prevalencia económica de las regiones y priorización electoral del espacio. Todo esto ha dado lugar a que persistan contextos de

vulnerabilidad históricos para diversas poblaciones especialmente agrarias, campesinas e indígenas y que, por tanto, la existencia de iniciativas de paz también se desarrolle de manera ondulante, según particularidades locales, como se verá más adelante.

Es importante señalar que las formas de la sociedad civil en respuesta a los conflictos, que tienen orígenes en los lugares más afectados, en raras ocasiones han sido apoyados por el Estado y, por el contrario, en no pocos casos se han presentado hechos de violencia oficial contra estas. Al mismo tiempo, las pocas iniciativas de articulación regional carecen de representatividad local que las dinamicen, así como de agendas a mediano y largo plazo que les permita aportar en la construcción de políticas regionales. Esto, sumado a la evidente priorización de las disposiciones centrales que ordenan el territorio departamental y que han hecho de la autonomía regional una disposición constitucional incumplida, constituye -sin duda- otro factor de violencia regional.

En el departamento se constata, según lo muestra la medición del PIB por contribución de actividades económicas, que el sector agropecuario permanece con una alta participación, al mismo tiempo que crece el peso de la minería y el sector de

hidrocarburos. Si bien no se encuentran cambios significativos en la variación del sector agropecuario en los últimos cinco años, esto representa más una inmovilidad de la estructura agraria ineficiente que una permanencia de un modelo exitoso. Las tierras planas, con mecanización y con sistemas de riego eficientes, siguen perteneciendo a un reducido número de familias mientras que el grueso de la población rural habita las laderas de las cordilleras, en la mayoría de los casos con problemas financieros para la producción agrícola y en muchas ocasiones con títulos de propiedad precarios.

En términos generales esta es la condición del departamento del Tolima, dividido entre su céntrica posición geográfica y la permanencia de un fuerte conflicto armado en su territorio, que hacen de este un lugar propicio para impulsar iniciativas de paz que a través de vías negociadas contribuyan a una negociación política del conflicto y al construcción de una paz estable y duradera. Proceso que, sin duda, será apoyado por las formas organizadas de la sociedad civil, que desde las Juntas de Acción Comunal, los Sindicatos Agrarios, las asociaciones de víctimas y las múltiples formas organizativas locales conservan la paz como un anhelo de futuro.

Capítulo 1 Configuración territorial y análisis de conflictividades

Durante la primera mitad del siglo XX en todo el valle del alto Magdalena se operó, de un lado, un proceso de modernización derivado de la paulatina descomposición de la gran hacienda basada principalmente en la fuerza de trabajo semiservil y la lenta consolidación de la agricultura capitalista, y, del otro, la consolidación de la mediana propiedad por parte de otros sectores sociales distintos de los hacendados tradicionales, básicamente de procedencia urbana y ligados a la actividad comercial. En ambos casos se dio un acelerado proceso de descomposición campesina y al predominio de las relaciones de trabajo asalariado a lo largo, sobre todo, del conocido plan del Tolima. El costo social y político de esta transformación del paisaje rural corrió por cuenta de los campesinos pobres, aparceros, arrendatarios y los pequeños y, en algunos casos, los medianos productores independientes asentados en el valle y, por supuesto, de los indígenas, cuya descomposición, desalojo y expulsión, hacia los pequeños y medianos centros urbanos, las zonas de vertiente o las nuevas fronteras de colonización fue el aporte a la modernización, pero también el soporte social de la violencia.

Al iniciar la década de los 60 ya se definía este nuevo perfil agrario de la región.

En primer lugar, y como consecuencia del proceso acelerado de concentración de tierras iniciado en las décadas anteriores, se

había definido una extensa franja latifundista- ganadera a lo largo de la llanura tolimense, franja que lateralmente se prolongaba hasta las vertientes cordilleranas.

En segundo lugar, y como resultado de los programas de irrigación y de parcelación iniciadas en las década del 40 sobre la parte central del valle del Alto Magdalena (Saldaña y Purificación), se había desarrollado un área que significó un lento proceso de transformación de algunos de aquellos latifundios -destinados anteriormente a la ganadería- en predios dedicados a los cultivos comerciales, especialmente de algodón y arroz.

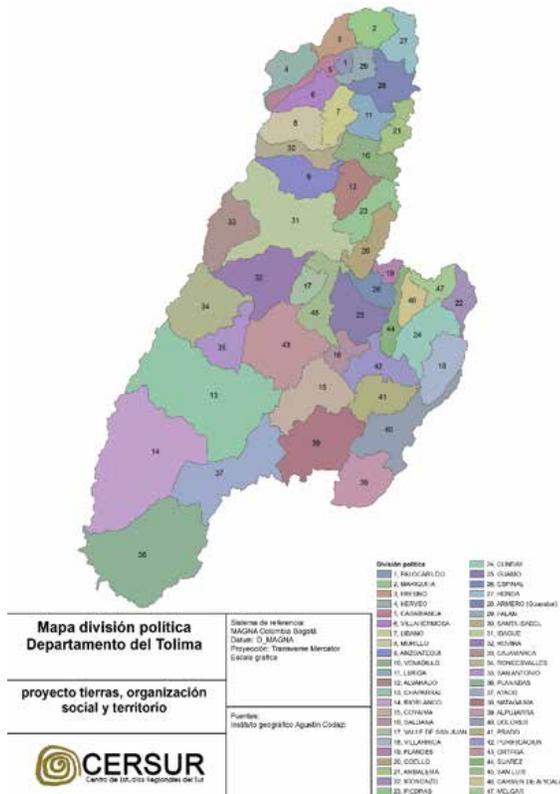
En tercer lugar, sobre la parte sur departamento y sobre sus áreas cordilleranas predominaba un tipo de economía campesina de aparcería y de arrendamiento, cuyas pequeñas extensiones estaban dedicadas básicamente a los cultivos temporales de pancoger como yuca, maíz, legumbres, frijol y, excepcionalmente, plátano y café.

Entre ganadería, la caficultura y el cultivo de arroz y algodón se debatirían los procesos de transformación económica del valle del Alto Magdalena y las laderas cordilleranas del Tolima.

El Tolima se entendió como parte del centro del país, punto de intersección que lo comunicaba con los departamentos del occidente y el sur: por un lado, por la ruta que conduce de Bogotá, el Eje Cafetero, el Valle del Cauca y salé al puerto de

Tolima: análisis de las conflictividades y construcción de paz

Buenaventura. Y por el otro, por aquella que se dirige al Huila y por este al Caquetá, Putumayo y Nariño (ver mapa 1).



Como límites departamentales, el Tolima tiene al Oeste a los departamentos del Cauca, Valle, Quindío y Risaralda; al Este, Cundinamarca y por esta dirección a la ruta que da acceso a la capital del país; al Norte se encuentra con Caldas; y al sur, Huila. El departamento está situado en el centro geográfico de Colombia, entre las cordilleras Central y Oriental, separadas de sur a norte por la cuenca del río Magdalena, que atraviesa todo el departamento dejando en sus costados un valle interandino extenso.

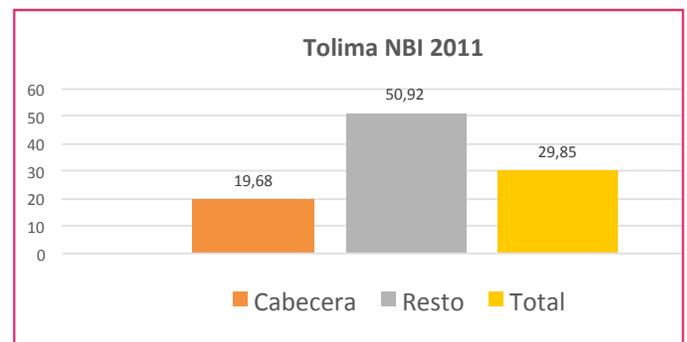
La cordillera central se eleva en el departamento desde el Nevado del Huila, recorriendo linealmente hasta la meseta de Herveo y el Parque Nacional de los Nevados, donde se encuentran los volcanes nevados del Huila, Quindío, Santa Isabel, Ruiz, Tolima y Cerro Bravo, haciendo de este un importante centro hídrico nacional y lugar de divisoria de aguas interdepartamental. La Cordillera oriental, por su parte, recorre de norte a sur el Páramo del Sumapaz, desde donde se desprende la cordillera del Altamizal y nacen los ríos Cunday y Prado.

El departamento está compuesto por 47 municipios en los que habitan 1.312.304 habitantes (Dane, 2005), de los cuales 887.689 se encuentran en las cabeceras municipales y 424.615 colombianos viven en zonas no urbanas. Es especialmente esta

población rural la que mantiene mayores condiciones de pobreza que propician una mayor vulneración sobre los derechos de los pobladores rurales.

En la ciudad de Ibagué, capital departamental, se concentran 495.246 personas y es en consecuencia donde permanece la mayor parte de la población. De estas, 29.387 personas habitan en zonas definidamente rurales, aunque otra parte de su población tenga vínculos fuertemente rurales.

En el Tolima, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas es del 29,85%, esto indica que son aproximadamente 393.692 los ciudadanos que se encuentran en esta condición (ver gráfica 1). Entre tanto, el índice de miseria se encuentra en el 10% de la población. Puede verse que existen condiciones mayores de vulnerabilidad en el INBI rural que asciende al 51%, contra un 19,68 % en sus cabeceras municipales. Con la miseria en el campo, según las fuentes del DANE, el incremento es significativo, alcanzando el 23% de la población.



Fuente: Elaboración propia a partir de información del DANE 2011.

La condición de la pobreza, acompañada de condiciones precarias para la comunicación vial, escasas cadenas de comercialización, pocas condiciones para el desarrollo rural, limitado acceso al derecho a la salud, bajos niveles en calidad educativa así como las limitadas posibilidades para la compra de tierras, hacen que la población rural mantenga condiciones de vulnerabilidad estructural, lo cual ha hecho del conflicto armado una posibilidad, o alternativa, para la población rural. Esta situación junto a las pocas posibilidades de desarrollo ha llevado a que los jóvenes rurales mantengan la tendencia migratoria hacia las ciudades capitales, donde por sus limitadas competencias laborales no encuentran alternativas de vida que los lleve a superar la pobreza.

Aún y cuando se muestran avances importantes en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población tolimense y en la mayoría de las mediciones, el departamento se encuentra por debajo de la media nacional, según análisis del

Centro de Estudios Regionales del Sur en el 2013. En este sentido la advertencia de algunos estudiosos es muy pertinente:

*“para el departamento será muy difícil alcanzar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que se evaluarán en el 2015 pues en temas tales como la erradicación de la pobreza puede observarse que en el 2002, 55,3% de los tolimenses se encontraba en esa condición; en el 2010 por lo menos cuatro de cada 10 personas (45,11%) se encontraban en esa condición y el Plan de Desarrollo de la actual Gobernación plantea que la meta para el cierre de su gobierno es bajar la cifra al 40%”*²

No hay que olvidar que la meta de los ODM era reducir la brecha de la pobreza en por los menos un 50% durante 2000- 2015, según la Declaración del Milenio de la Organización de Naciones Unidas.

Territorio y cultura

La región del centro andino del país y, en este caso, del departamento del Tolima tiene características culturales diversas que obedecen a tres patrones de poblamiento iniciales. El primero se ubica en el poblamiento precolombino ligado a la nación Caribe. El segundo fue el procedente de la conquista y colonización española en el siglo XVI. El resultado del encuentro entre estas culturas fue una cruenta lucha en la que los españoles, en nombre de Dios y el Rey, dieron muerte a miles de indígenas, asesinaron a pueblos enteros e hicieron esclavos a los restantes, lo que provocó que la región de tolimense rápidamente se mestizara y predominara en su territorio lo que hoy identificamos plenamente como ladinos. Y un tercer patrón se fundamenta en la concesión y ocupación de los abundantes terrenos baldíos estatales de las cuales el más documentado ha sido el de la colonización antioqueña.

Básicamente sobre estos tres patrones de poblamiento se levantan las formas culturales que se pueden identificar en las subregiones tolimenses. Las diversas elaboraciones de académicos regionales (Espinoza, Gómez, González, Pardo, Ramírez, Santa, entre otros) señalan 5 tipos de asentamientos subregionales así:

1. **Pueblo Pijao.** Una vez que los españoles se consolidan en el valle del Magdalena y se da la guerra entre los colonizadores y los pueblos indígenas se modifican las regiones que fueron habitadas históricamente por la población aborigen. Los españoles se toman inicialmente lo que hoy es el municipio de Honda por la importancia estratégica que se representaba en su puerto. Y se hace lo propio con los pueblos de Mariquita, Ibagué y el Espinal.

Aunque la nación Pijao fue exterminada culturalmente, sus descendientes han realizado un ejercicio juicioso de recuperación de la memoria. Actualmente sus cabildos se ubican especialmente en el sur del departamento, sobre los municipios de Natagaima, Coyaima y Ortega, con algunos resguardos ubicados en municipios como Chaparral. Si bien la estructura de la propiedad para los Pijaos entiende los resguardos como un territorio colectivo y no susceptible a apropiación de terceros, las experiencias en los municipios evidencian que la tierra se parcela para explotación individual o familiar pero sin trasladar la propiedad. Adicionalmente, dejan un terreno del resguardo con destinación al trabajo comunitario – colectivo.

2. **Pueblo Ribereño:** Con este calificativo se intenta identificar a la población que habita el valle del Magdalena y que comparte estructuras similares a las de la hacienda colonial. Estos habitantes provienen de un fuerte mestizaje entre indígenas y españoles. Los poblados se basan en sistemas productivos agrícolas que han permanecido sin muchas variaciones, es decir, grandes extensiones de tierra constituidas como haciendas que vinculan a la población como mano de obra para garantizar la explotación del suelo.

La variación más importante que se ha dado en este territorio está ligada a la mecanización de suelos y al aumento de la productividad de monocultivos como el arroz, en un fortalecimiento que se impulsa mediante distritos de riego. En los cambios espaciales más importantes puede observarse la disminución de la variación de cultivos, pues donde antes podía encontrarse algodón, maíz, sorgo, tabaco o arroz, ahora hay una prevalencia del arroz, con periodos de descanso para la tierra de siembra que se dan en maíz y en menor medida, en algodón. Entre los municipios que componen la región están Prado, Purificación, Saldaña, Guamo, Flandes, Suarez, Melgar, Carmen de Apicalá, San Luis, Valle de Sanjuan, Ibagué, Alvarado Venadillo, Ambalema, Lérida, Armero, Mariquita y Honda.

3. **Pueblo Cundinamarqués:** Aquí se encuentran los colonizadores de la Cordillera Central, por su vertiente occidental y que se extiende hasta el flanco occidental de la cordillera oriental, cuyo patrón de colonización se ligó a la Hacienda Cafetera, la cual fue perdiendo fuerza desde la crisis agraria de finales del siglo XIX y empezó a socializarse su cultivo por pobladores que descendían de la sabana de Bogotá y que forjaron fundos en los municipios de Icononzo, Villarica y Cunday, con una menor presencia en Carmen de Apicalá, Melgar, Dolores y Alpujarra (Fajardo, 1993).

Varios de estos municipios se han dedicado al turismo como forma de vida y varias fincas de producción agrícola han

² Entrevista a Andrés Restrepo Correa, Director del Centro de Estudios Regionales del Sur. Febrero de 2015.

cambiado su destinación para ser casas de recreo, que son visitadas asiduamente por capitalinos. Las poblaciones que se encuentran sin una conexión directa con la vía que conduce a Bogotá tienen una composición mucho más rural, poblaciones como Dolores, Alpujarra y Villarica se conectan con el Huila y con el Sumapaz mediante corredores regionales que han sido testigos excepcionales del conflicto armado.

- 4. Pueblo Antioqueño:** La colonización antioqueña tomó la ruta del viejo Caldas y se ubicó en el cinturón cafetero, un espacio que se encuentra sobre la cordillera central y que entre los 1500 y los 1800 metros sobre el nivel del mar (msnm). El avance se dio de norte a sur, desde las tierras aledañas al nevado del Ruiz en los municipios del Líbano, Herveo, Fálán y Fresno, para iniciar un avance constante que llegó hasta el sur de la cordillera en el departamento y que encuentra vestigios en San Antonio, Chaparral, Planadas o Río Blanco, por nombrar algunos. Su economía se caracteriza por el cultivo de café y, en menor medida, cultivos como la caña y el plátano o apuestas productivas con ganadería de ladera.

Su composición familiar se caracterizaba por familias numerosas para explotar la tierra mediante economías campesinas, con cultivos de pancoger. Situación que ha variado notablemente en la actualidad porque las parcelas se han dedicado, casi con exclusividad, a la caficultura, haciendo cada vez más escasas las huertas familiares. De hecho, no resulta común encontrar haciendas cafeteras y predominando los cultivos en parcelas de menos de 1 hectárea hasta 10 hectáreas.

- 5. Pueblo Cundiboyacense:** La población cundiboyacense llega al departamento atraída por el auge del café y motivada por condiciones propicias en la tierra. Los cundinamarqueses y los antioqueños inicialmente los vincularon como jornaleros de bajo costo en mano de obra, pero las condiciones geográficas posibilitaron una migración que se ubicó en las zonas paramunas y preparamunas, entre los 1800 y los 2200 msnm, en municipios como Murillo, Santa Isabel, Anzoátegui, Casabianca o Villahermosa.

En esta región proliferó especialmente el cultivo de papa y hoy se hace fuerte la ganadería. Los conflictos sobre el uso del suelo se presentan en especial por sobreutilización de zonas que teniendo vocaciones de conservación se explotan agropecuariamente. A estos conflictos, entre conservación y producción, se agregan los derivados de los derechos de dominio que se registran desde finales del siglo XIX.

Como se observa, el departamento del Tolima se configura como un compuesto de múltiples movimientos migratorios, que hace de su región un lugar pluricultural, una representación de Colombia misma y sus movimientos. Importante resaltar que es la población tolimese también la que da avance a las

colonizaciones en el Huila y, posteriormente, a la que se dio sobre el piedemonte amazónico, en lo que hoy se ubica como el Caquetá, el Putumayo y parte del Meta.

También se puede identificar subregiones que se unifican más en términos geográficos y debido a la posibilidad de movilidad económica³, haciendo de las características culturales un elemento transable para la conformación de territorios. Con algunas ligeras variaciones, a lo largo del tiempo se encuentran estas unidades administrativas así ((ver cuadro 1):

Subregiones administrativas del Tolima.	
Subregión	Municipios
Norte	Honda, Mariquita, Fresno, Palocabildo, Fálán y Armero Guayabal.
De los Nevados	Herveo, Casabianca, Villahermosa, Murillo, Santaisabel, Líbano, Lerida, Venadillo y Ambalema.
Centro	Anzoátegui, Alvarado, Piedras, Coello, Ibagué, Cajamarca, Rovira, Valle de San Juan, San Luis, El Espinal y Flandes.
Sur Oriente	Dolores, Prado, Purificación, Saldaña y el Guamo siguiendo por la cordillera oriental con los municipios de Suarez, Carmen de Apicalá, Cunday, Villa Rica, Alpujarra, Icononzo y Melgar.
Sur	Roncesvalles, San Antonio, Ortega, Coyaima, Natagaima, Chaparral, Ataco, Río Blanco y Planadas.

Fuente: Centro de Estudios Regionales del Sur – CERSUR- 2013.

En estas subregiones se pueden encontrar elementos comunes en sus dinámicas productivas y culturales, que hacen causa común con las categorías por grupos poblacionales. Si bien en el departamento no existen confrontaciones interregionales significativas en razón a la procedencia, sí podemos evidenciar que de acuerdo a su ubicación geográfica se generan tejidos sociales particulares. Bien sea la afinidad de los municipios del norte con el departamento de Caldas o la del sur, con Huila y Cauca.

Las tradiciones culturales de la región han estado vinculadas al sincretismo de las costumbres españolas con recodos de las tradiciones indígenas. El Tolima siente una gran afinidad con los territorios que constituyen hoy el departamento del Huila, cuyo territorio es conocido como el Tolima Grande. Su música se remite a bambucos y rajaleñas; su comida a una mezcla entre estofados españoles e ingredientes. El tamal, la lechona y los insulsos son elementos de convergencia.

³ Resulta común que la planeación estatal en el territorio, así como los procesos de intervención sigan este modelo de planeación, que guarda una coherencia geográfica pero que superpone parcialmente elementos sociales.

El Líbano y el norte del Tolima

Sin entrar a detallar toda la región y sin ser esta una monografía sobre el municipio del Líbano, esta localidad fue priorizada para el análisis del conflicto motivado en su historia fundacional, en su ubicación geográfica y en sus vivencias recientes. El municipio se encuentra en la cordillera central, rodeado de cafetales, de bosques húmedos y su territorio llega hasta ecosistemas preparamunos que le hacen antesala al nevado del Ruiz.

El municipio fue fundado por colonos provenientes de Antioquia y Caldas, que en la búsqueda de nuevas tierras para el cultivo y de un lugar para hacer fundo atravesaron la cordillera y se establecieron en el valle rodeado de colinas que hace la cabecera municipal.

La tierra se apropió mediante adjudicaciones de baldíos dadas a colonos y ocupantes de la región en 1866. Una vez con tierra y títulos la aldea hizo tránsito a municipio y con él se involucró en la vida política de la nación, desde las guerras civiles hasta levantamientos armados de carácter socialista, como el ocurrido en 1929 y que se conoce bajo el nombre de los Bolcheviques del Líbano. Durante la Violencia de los 50 operaron sobre el municipio las cuadrillas de Tarzán, Desquite y Sangre Negra, para luego ser víctima de la violencia estructural que predominó durante el Frente Nacional (Sanchez, 2009) (Santa, 19849) (Calderón, 2012).

El Líbano luego se involucraría en los levantamientos armados guerrilleros que proliferaron por el departamento, especialmente alrededor del ELN. Así, era común que los jóvenes se vincularan a los actores armados aún durante su formación escolar. El Frente Bolcheviques del Líbano nacido entre el 1990 y 1992 (ELN, 2006)⁴ es, sin duda, el que tiene más recordación en la memoria del país.

“...Ser del Líbano era, como se decía en esa entonces, tener cédula roja, haga de cuenta usted como la gente que tiene una cédula de San Vicente del Caguán, cuando uno llegaba a un retén militar de una vez lo sacaban aparte y empezaban a hacerle preguntas...”⁵

También en el municipio operaron otros actores armados como el EPL, las Farc-ep o el ERP en la zona rural, así como el M-19 en la zona urbana. El norte del Tolima fue tomado entonces por estructuras armadas irregulares quienes hicieron control territorial y tuvieron una zona de tránsito entre el

4 Comunicado público Ejército de Liberación Nacional, Agosto 23 de 2006.

5 Entrevista a Guillermo Peña. Neiva 2009.

departamento, el Magdalena Medio y Caldas. Por su parte, el paramilitarismo inició su incursión en el norte del Tolima. Con tres bloques paramilitares diferentes iniciaron avanzadas sobre el departamento y se consolidaron con la creación del Bloque Tolima, el cual además de la victimización de múltiples actores sociales, reconfiguraron el panorama político departamental.

Los años 90 iniciarían con la apertura económica promovida durante el gobierno de Cesar Gaviria y con una crisis agrícola⁶, que promovió la organización de los productores alrededor de figuras gremiales, entre las que se destacó principalmente Asopema (Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores del Tolima), organización que participaría de manera activa durante el paro cafetero del año 1995 (Bautista, 2013)⁷.

El paro del 95 llevó a negociaciones con el Estado, en las cuales el entonces ministro del interior, Horacio Serpa, firmó un acuerdo de condonación de la deudas de pequeños y medianos cafeteros, subsidios para el control de la broca y la roya, inversión económica para proyectos productivos y respeto y garantía para los derechos de los campesinos⁸.

“...Asopema fue una organización como nunca volvió a haber acá. La gente estaba muy convencida y no había problema para trabajar con la gente... Nos reunimos con la gente de Fresno, de Herveo, con los de Caldas...”⁹

Ataco y la puerta al sur

Es un municipio de antigua conformación y fundación entre 1656 y 1778. Sin embargo es hasta 1887 que eleva su categoría a distrito y hasta 1950 define sus límites territoriales. El municipio de Ataco está ubicado en el sur del Tolima y converge en sus límites geográficos con los municipios de Chaparral, Coyaima y Rioblanco, por el Norte; con Natagaima, por el oriente; con Planadas, por el occidente; y con el departamento del Huila, por el sur.

6 Hubo quizá tres factores detonantes del paro: la aparición de la broca y con esto la pérdida de plantaciones enteras de café; la mala racha del comercio internacional que bajó los precios de compra de las exportaciones, y la poca capacidad de adecuación del cambio colombiano a la apertura económica que promovió pérdida adquisitiva para los productores.

7 Bautista, S. C. B. (2013). Alternativas analíticas en el campo de la movilización social en Colombia: la acción colectiva de alto riesgo. Lecturas a propósito de la protesta campesina en el Tolima. *Estudios Políticos*, (41).

8 Más información en: <http://www.colombiainforma.info/cultura/recordando/2078-a-20-anos-del-primero-paro-cafetero-del-norte-del-tolima>

9 Entrevista a Gustavo Vanegas, 13 de febrero de 2015.

El municipio se ubica entre el valle interandino y la ladera de la cordillera Central. Su territorio se encuentra dividido en 105 veredas y por el corregimiento de Santiago Pérez. El municipio conoció el conflicto durante el siglo XIX con las guerras civiles y, a mediados del siglo XX, estuvo involucrado en La Violencia pues el combate entre el Estado, Limpios y Comunes tuvo como protagonista al Sumapaz y el sur del Tolima.

Las armisticios impulsados por Rojas Pinilla y por Lleras Camargo pausaron temporalmente el conflicto en la región, pero en ese tiempo los campesinos partidistas se organizaron en los primeros grupos paramilitares al mando del General Mariachi. En los 80 del siglo pasado, se constituyó el grupo Rojo Atá, que sería la base del Bloque Tolima de las AUC.

En el municipio de Ataco se concentrarían múltiples conflictos y las confrontaciones entre paramilitares y guerrilleros dejarían como víctimas a la población civil, especialmente a los habitantes rurales, 16.750 desplazados en los últimos 20 años de conflicto. Igualmente el abandono de tierras en el municipio se presenta de manera recurrente. Al día de hoy, es el municipio del departamento que más solicitudes de restitución ha registrado. El caso del despojo, como se verá más adelante, está ligado a un abandono de tierra durante el desplazamiento en razón a las amenazas provenientes de los diversos actores armados y del conflicto armado en sí mismo.

“De hecho hay rumores, que dicen que las autodefensas han subido y por ahí han dejado panfletos... Las Farc-ep también dicen que están pasando y la gente dice que están llegando de civil a ver la gente y, por otro lado, están los extorsionistas que se hacen pasar por grupos legales pero que son delincuencia... Hasta ahora se está denunciando eso...”¹⁰

Fuente: Puente del río Saldaña, denota las manifestaciones de los procesos sociales y la presencia de grupos armados ilegales (grafitis de AUC y las Farc-ep). Foto: José Jairo González, febrero de 2015.

El municipio hoy tiene heridas abiertas y sigue viviendo de manera muy fuerte el conflicto armado. La situación de la pobreza en la población sigue siendo alarmante, mientras que la minería informal, que es una de las alternativas municipales de empleo e ingresos, vincula a cerca de 450 niños¹¹, todos con bajos niveles de escolaridad. La agricultura se basa en la producción cafetera, acompañada de cultivos de plátano, yuca y maíz.

10 Taller de formación y socialización del estudio Análisis de Conflictividades en el departamento del Tolima, Febrero de 2015.

11 <http://www.portafolio.co/economia/ninos-trabajando-minas-oro-ataco-tolima>

Este municipio es la entrada a escenarios donde la conflictividad es mucho más latente como Planadas, Chaparral y Río Blanco. Los controles territoriales se hacen difusos, pues si bien existe presencia estatal a partir de estructuras ejecutivas en las administraciones municipales y a partir de la fuerza pública estatal, la región tiene dinámicas propias que desde hace décadas han estado presentes. El proceso de paz y sus expectativas genera incertidumbres para los habitantes que han vivido otros procesos de desarme y reintegración, sin que cambiaran las condiciones sociales de la región. Vieron, también, levantarse nuevos y viejos actores armados que continuaron el ciclo de violencia.

Economía regional

Fuente: Secadero de café en finca Tolimense. Foto Camilo Ernesto Gómez. Marzo de 2013.

Tolima, como muchas regiones de Colombia, ha estado principalmente a la agricultura, aunque se dieron algunos impulsos a la industria textil, esta no se sostuvo en el tiempo y con la apertura económica iniciaría un declive que la dejaría por fuera de la competencia interna y externa. Otra área importante está en el sector de hidrocarburos y la minería, que se mantienen vigentes e impulsan ambiciosos planes para el departamento. Sin embargo, por fuera de las actividades de producción primarias que se dan sobre la tierra, el Estado sigue siendo el promotor del mercado y el garante en la generación de servicios e ingresos.

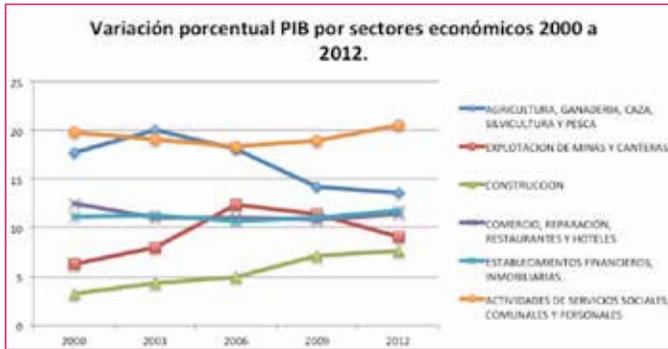
En este sentido, existen sectores económicos que dentro del PIB han tenido aumento permanente. Por un lado están las actividades de servicios sociales, comunales y personales - la administración pública y el empleo formal aportan de manera sustancial- y, por otro, la construcción que ha tenido un impulso importante de la mano con la vivienda nueva, mejoramiento urbano y vías.

El valor del PIB en el departamento del Tolima creció un 68%¹² entre 2000 y 2012, sin embargo el punto a evaluar estaría determinado por su impacto en el crecimiento del PIB y del bienestar social pues, el índice GINI durante el mismo periodo osciló entre 0,47 y 0,44.

En los sectores económicos resulta importante observar los cambios principales que se dieron para entender cuál es el papel de estos y cuáles son sus relaciones con la sociedad. La agricultura es el segundo sector que más aporta al PIB del departamento: llegó a representar el 20% en el 2003 y su participación tuvo una caída permanente, desde entonces. Hoy aporta el 14%.

12 Las cifras del DANE registran que el PIB para año 2000 se contaba en 6.856 y para el año 2012 en 11.611 miles de millones de pesos.

El departamento se entiende con potencial en minas y canteras de diverso tipo, desde los pozos petroleros del valle del Magdalena, pasando por los yacimientos de oro de Cajamarca y el Líbano, hasta las canteras de arena, piedra y gravilla que se realiza sobre los cauces de los ríos. La actividad minera se desarrolla principalmente por hombres: esto sucede en el 94% de los casos. Los mineros acostumbran a trabajar 22 días al mes y las jornadas pueden o no ser de 8 horas, según la relación que exista con el empleo y el estado de legalidad o ilegalidad de la mina (ver gráfica 2).



Fuente: Elaboración propia con base a información del DANE

En el Tolima, la mayoría de los mineros tienen un nivel educativo de básica primaria y secundaria, así como hay un gran porcentaje de analfabetos. Los técnicos y profesionales están en labores de administración y dirección de las minas y son un número menor. Según el registro del Censo Departamental Minero adelantado a 2011, en el Tolima se estima que el 40% de las minas tienen título y el 60%, no, lo que denota la informalidad de la relación de esta actividad.

La actividad minera tiene gran promoción en la región y con esta promoción especialmente para la titulación de minas se han generado constantes conflictos sociales entre el extractivismo y el conservacionismo. La actividad de minas y canteras representó para el año 2012 el 9% de los aportes al PIB.

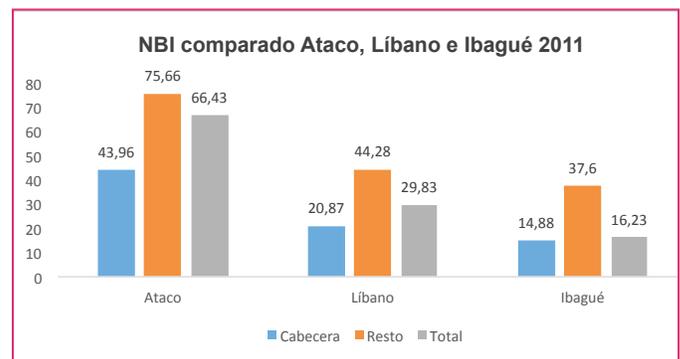
Actividades como las del comercio regional y las de economía financiera representan el 11% y 12% respectivamente y su relación en el tiempo se ha dado de manera estable, sin variaciones respecto al total del PIB. La construcción, por su parte, tiene un crecimiento muy importante del 3% al 8% en el PIB. El soporte se da en los cambios de demográficos del departamento, en donde la mayoría de los ciudadanos se trasladan a zonas urbanas y aumentan la demanda de bienes para vivienda, al igual que la permanencia de ambiciosos planes de infraestructura que conectan al departamento con la región y con la capital.

Como ya se ha dicho, los municipios de Ataco y el Líbano se entienden como una muestra de las diferencias regionales entre el sur y el norte, al mismo tiempo que Ibagué sirve de parangón para la medición. Entre norte y sur existe una discusión constante, motivada por una percepción sobre la inversión pública que desde las gobernaciones se han dirigido históricamente para cada subregión.

El norte de la Cordillera central se vinculó, primero, a las cadenas económicas de la agricultura de la mano del café y se hizo fuerte con la inversión en la tierra por parte de nacionales y extranjeros. Así, la inversión de los excedentes propició el crecimiento económico pues se invirtieron recursos desde la Federación Nacional de Cafeteros en obras tan variadas como puentes, carreteras, escuelas y, por supuesto, en tecnificación del café.

El sur, de una extensión territorial basta, estuvo destinado a procesos de colonización fuertes hasta la historia reciente. De tal modo que en los años 50 se estaba dando procesos de colonización de la cordillera, de toma de haciendas de terratenientes o de adjudicación de baldíos de la nación. Así, el proceso de adecuación de suelos y de inclusión en el mercado agrícola se extiende hasta los 90 y puede observarse en la actualidad.

En este sentido las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), por municipio, muestra un reporte muy dicente a cerca de las divisiones regionales (ver gráfica 3). Ataco, uno de los municipios con más altos niveles de pobreza, registra que el 75,66% de su población rural tiene necesidades básicas insatisfechas, mientras que en la zona urbana es el 43,93%. En total se registra que el 66,4% de la población de Ataco tienen problemas de hacinamiento, de vivienda, de abastecimiento de agua potable, de servicios públicos, de acceso a la educación o de capacidad económica.



Fuente: Elaboración propia a partir de información del DANE

En el Líbano, como representación del norte, puede observarse que el NBI se encuentra en 44,28% en la zona rural y en 20,87%

en la zona urbana. En total hay un NBI en el municipio del 29,8%, un porcentaje que se acerca a las cifras departamentales, aunque se mantiene una diferencia de 13 puntos porcentuales respecto del total.

Si bien hasta finales de los 90 el norte aparentaba mayor cantidad de recursos de inversión pública y también mayor productividad en las áreas agrícolas respecto al sur, actualmente se manifiestan altas inversiones para el sur a través de la estrategia de consolidación del Estado, que es una iniciativa que busca cerrar espacios a la insurgencia llenando los vacíos de institucionalidad existentes.

“...Ahora todos se quieren declarar víctimas, aunque nunca les haya pasado nada y uno los ve por el pueblo normal... Los municipios quieren ser afectados por el conflicto así no haya presencia grande de los actores armados, porque así es que está llegando la plata... mire el caso del sur...”¹³

De hecho, en el Plan Consolidación convergen acciones que, desde planteamientos militares, han generado alianzas interinstitucionales para promover la presencia del Estado, el sector privado y la cooperación internacional¹⁴. En los territorios que se focalizan, teniendo en cuenta la colorimetría militar y razonamientos estratégicos del Estado, se adelantan estrategias grandes de intervención en infraestructura como vías, escuelas y escenarios deportivos, de la mano de acciones militares de recolección de información y campañas contrainsurgentes.

La tierra y los usos del suelo

Tolima tiene una gran cantidad de propietarios y cantidad de predios registrados. Como ya se expresó, la propiedad de la tierra cuenta con características particulares según la región que se estudie, pero a nivel general pueden plantearse algunos elementos para comprender la estructura agraria en el departamento.

En la relación legal entre los predios y sus ocupantes hay una tendencia creciente al registro de predios ocupados tiempo atrás, sobre los que no se había realizado procesos de pertenencia y sobre los que existía únicamente la posesión. Al mismo tiempo, se registran casos de predios que aún no son registrados y sobre los que se sostienen títulos de propiedad precarios, especialmente sustentados en carta-ventas, declaraciones extra

¹³ Entrevista a Dagmar Hernández, Red de Mujeres Chaparralunas, Tolima. Marzo de 2015.

¹⁴ Misión de la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial.

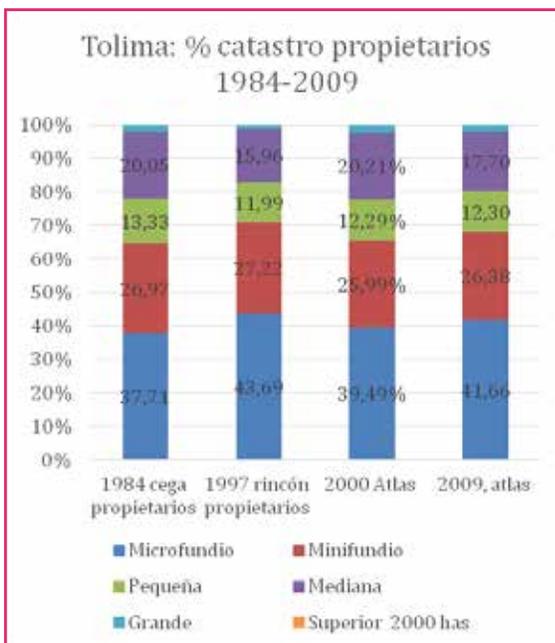
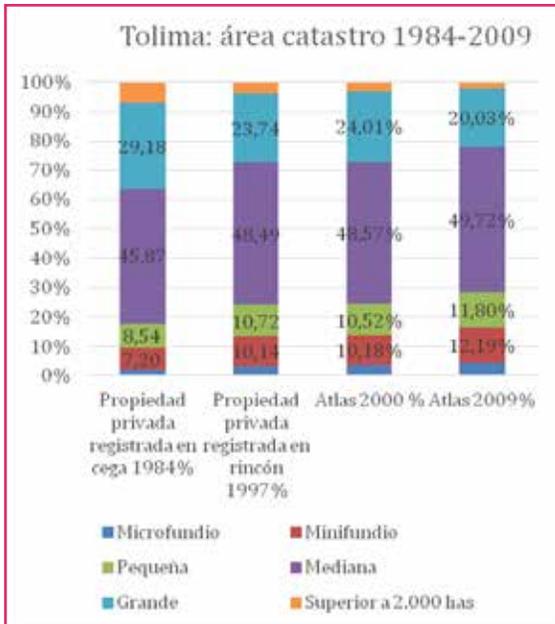
juicio, documentos privados de compraventa y certificaciones emitidas por Juntas de Acción Comunal. La cantidad de casos de los predios sin registrar varía según el municipio que se estudie y, al mismo tiempo, depende de la cercanía con el casco urbano del mismo, aunque el nivel de registro frente a las demandas sigue siendo bajo.

En este sentido, el número de propietarios registrado aumentó de manera notoria entre 1984 y 2009, de 126.594 a 203.308 propietarios, respectivamente, lo cual supondría un proceso de registro de tierras y de subdivisión de predios, ya que los procesos de colonización habrían frenado esta situación para este periodo. En el aumento de los propietarios y de los predios registrados hay dos fenómenos importantes a considerar. Por un lado, los procesos de crecimiento familiar y las sucesiones que se dan de padres a hijos, que subdivide un predio en tantas partes como sucesores existan. El otro fenómeno es el desenglobe de los predios logrados mediante parcelación o reforma agraria del Incora y el Incoder, pues una vez vencidos los términos legales de enajenación o las medidas de protección de los predios muchos de los propietarios solicitan título individual y así ingresan al mercado de tierras.

“Es muy difícil encontrar tierra libre para ocupar, eso se veía más antes que la gente se subía a la montaña y hacía finca. Ahora no, la tierra ya está ocupada y lo que queda pues no se puede tocar porque es zona protegida. Lo que sí se ven son algunas fincas abandonadas por la violencia o porque quedan muy lejos. Imagínese una finca a 5 ó 6 horas de carretera desde el pueblo y luego otras tantas a pie... Ya nadie quiere vivir ahí”¹⁵.

En el mismo sentido se evidencian varios escenarios alrededor de la propiedad de la tierra. Por un lado continúa con el proceso de microfundización que entre 1984 y 2009 llevó a que los propietarios de microfundios se multiplicaran de 47.739 a 84.690, al mismo tiempo que el área ocupada por estos predios aumentó de 42.730 hectáreas a 80.846. En ese sentido crece la cantidad de propietarios de todas las categorías de propietarios, no así con la superficie ocupada por cada categoría, pues mientras aumentaron el microfundio, el minifundio, la pequeña y la mediana propiedad, disminuyeron el área ocupada, la gran propiedad y aquella que ocupa superficies superiores a 2000 hectáreas (ver gráficas 4 y 5).

¹⁵ Grupo Focal con la oficina de la UMATA, Planadas Tolima. septiembre de 2013.



Fuente: Elaboración de Carlos Camilo Ernesto Gómez con base a la Información de CEGA, IGAC y el Atlas del IGAC 2009. Tomado de anexos del informe Tierra, Organización Social y Territorio del departamento del Tolima, elaborado con el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Siguiendo la línea del Atlas de propiedad de la tierra, entre 2000 y 2009 disminuyó la cantidad promedio de hectáreas de propiedad privada por propietarios, de 14,5 hectáreas a 13,5 hectáreas (IGAC, 2009), sin que esto cambiara la situación de concentración de la tierra.

Ahora el fenómeno con la gran propiedad es interesante pues los propietarios de más de 2000 hectáreas aumentan en número y disminuye el área ocupada por sus predios, situación que se repite con la gran propiedad. Esto en principio muestra un proceso de desconcentración de la tierra o subdivisión de la misma en cerca de 200.000 hectáreas, sin que esto signifique que cambia la estructura de los propietarios y su relación de poder con la tierra y los campesinos.

De hecho, los hacendados mantienen posiciones privilegiadas en su relacionamiento político, acceden con mayor facilidad a auxilios para potenciar la productividad de sus predios y hacen parte de un sistema de privilegios sostenido en la historia, que mantiene estructuras de desigualdad en la tenencia de la tierra en el Tolima. Es así que el 1,96% de los propietarios con más tierra son dueños del 22,05% de la misma, mientras los propietarios de microfundios son el 41,66% y solo acceden el 4,24%.

En la estructura agraria se debe mencionar, adicionalmente, el papel principal que jugó la adjudicación de baldíos en el proceso de construcción de la estructura de la propiedad¹⁶. De la información de adjudicación de baldíos logra observarse que en el sur del departamento, en los municipios de Ataco, Planadas, Río Blanco y Chaparral, se hicieron 8.733 adjudicaciones que asignaron en total 284.469 hectáreas. Menos adjudicaciones se dieron en el norte del departamento, pues en los municipios de Líbano, Fálán, Mariquita y Armero fueron 1.913 adjudicaciones con beneficiarios de 24.516 hectáreas (Gómez, 2014).

Este proceso estuvo determinado, como se ha mencionado, por la composición del territorio, que se definía por una región norte mucho más poblada y con menos inestabilidades jurídicas sobre la tierra, frente al sur de departamento, que se movió por procesos continuos de colonización, mediados por la violencia, por la poca presencia del Estado y la precariedad de los títulos. Finalmente, se adjudicaron entre 1903 y 2012 un total de 739.688 hectáreas, que hoy en día representan el 38,8% de la propiedad privada registrada, en una distribución que estuvo destinada principalmente a la gran propiedad y a un número reducido de propietarios, en detrimento de una gran cantidad de adjudicatarios que accedieron a poca tierra (Gómez, 2014).

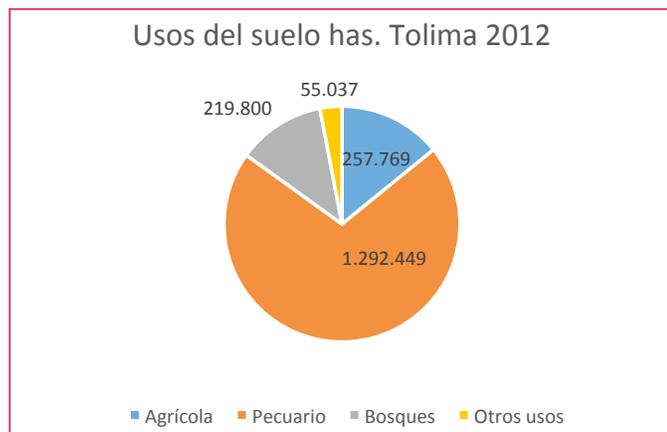
¹⁶ En este tema la investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica CNMH, *Tierra, organización social y territorio*, aún inédita, ubica con mucha precisión los cambios en la política de adjudicación de baldíos desde 1903 al 2012, prisma desde donde se puede leer cómo esta política de Estado construyó país, las relaciones que se conformaron a partir de los procesos de adjudicatarios y pueden percibirse ciertas coincidencias entre la adjudicación de tierras y la actual estructura de la propiedad. La investigación dirigida por Rocío Londoño -y con coordinación de José Jairo González en la región sur colombiana- cuenta con un análisis particular para el Tolima.

La agricultura

Como ya se demostró la agricultura es parte fundamental del desarrollo económico del departamento y tiene características particulares según la región que se observe, con claros contrastes entre la agricultura de ladera, articuladas a productos diversos, aún en los casos de los procesos cafeteros, y la agricultura mecanizada del plan del Tolima¹⁷.

Es claro que el departamento comprende varios pisos térmicos que se ubican desde trópico bajo, en el que se encuentra la mayor parte del departamento; el trópico medio, así como las tierras frías y paramunas. Esto hace que Tolima tenga múltiples posibilidades de producción agrícolas, entre las que se destacan principalmente el arroz, el algodón y, aún, el maíz; por supuesto la ganadería, y cultivos como el café, el cacao y los frutales.

El uso del suelo en el departamento hasta el año 2012 (ver gráfica 6) estaba destinado mayoritariamente a la producción pecuaria, que ocupaba el 71% del área agrícola tolimese y que ganó terreno en las zonas frías y preparamunas, seguidos por la producción agrícola y los bosques, que ocupan 14% y el 12%, respectivamente.



Fuente: Elaboración propia a partir de información recogida en campo

Este modelo productivo generará conflictos de uso del suelo que estarán marcados por la utilización respecto a la vocación de los suelos. Es el caso del conflicto entre la ganadería y la agricultura, en el que se presenta un uso de tierra mayor del que en principio estaría destinado para ganadería y se le quita espacio a la agricultura como forma de producción ajustada a las características agroecológicas.

17 Fajardo Montaña, Darío. "Espacio y sociedad: formación de las regiones agrarias en Colombia". Corporación Aracua. Bogotá 1993.

*"...nosotros reconocemos que hay un impacto de la ganadería en la agricultura y en el ambiente, pero eso no quiere decir que lo hagamos con la intención de hacer un daño o algo así. Estamos es produciendo pues la ganadería ha tenido pérdidas... ahora trabajamos en modelos para hacer más sostenible la producción de ganado en el departamento con sistemas silvopastoriles y capacitaciones en buenas prácticas"*¹⁸.

El proceso cafetero juega un papel muy importante en la construcción de región y en la economía agraria. Son cerca de 110.000 hectáreas sembradas en este cultivo que han dado paso a una cultura cafetera, con la que se identifican gran parte de los campesinos de ladera. Este cultivo representó, por un lado, la inserción del pequeño agricultor al mercado financiero pues reemplazó en gran medida la economía de subsistencia por el mercado monetario en la cosecha y, por otro lado, fue la presencia de la inversión en carreteras, escuelas y demás bienes públicos por parte de la Federación Nacional de Cafeteros. "Para el año 2013 el cultivo de café empleaba a más de 63.000 personas, se contabilizaban cerca de 69.000 fincas cafeteras que le correspondían a 59.000 caficultores" (CERSUR, 2013)¹⁹. Esto quiere decir que cerca del 17% de la población total del departamento se encontraba empleada en el cultivo de café, sin contar el resto de la cadena de comercialización, que comprende la recolección, la compra, el transporte y la venta del grano. El campesino cafetero padece los precios del mercado internacional, en donde se disputa la pérdida de ingresos en el cultivo y la posibilidad de ganancia.

Los campesinos del Tolima se movilizan desde los años 50, primero por el acceso a la tierra y la parcelación de la hacienda improductiva; luego, aunque aún no tenían la propiedad de la tierra, por la construcción de carreteras, insumos agrícolas y el apoyo a cadenas de comercialización. En 1993, por la caída de los precios internacionales del café que obedecían a la apertura económica; en 1998, nuevamente por la propiedad de la tierra que se perdía en los embargos masivos de tierras. Luego fue un periodo de protesta que pedía el fin de la guerra, el cese de las capturas masivas, la seguridad humana. En el 2013 volvieron a ser las protestas por los precios de sustentabilidad para la producción cafetera, por apoyos técnicos y por subsidio a los insumos agrícolas, todo en la preparación de la competencia agrícola con el Tratado de Libre Comercio.

18 Delegado de la Federación de Ganaderos, seccional Tolima, durante el taller de conflictividad y construcción de paz de PNUD en Ibagué. Febrero del 2014.

19 El Tolima, la organización social y la economía. Documentos inéditos, Neiva. 2013.

En el periodo que comprende 1987-1993, que estuvo marcado por la crisis para el campesino, se promovió el cultivo de amapola, que impactó de manera muy fuerte en el sur del Tolima, donde se concentraba el 28% de los cultivos de café del departamento y que empezaron a ser remplazados para dar paso a la siembra de amapola, que aseguraba rentabilidad en su comercio.

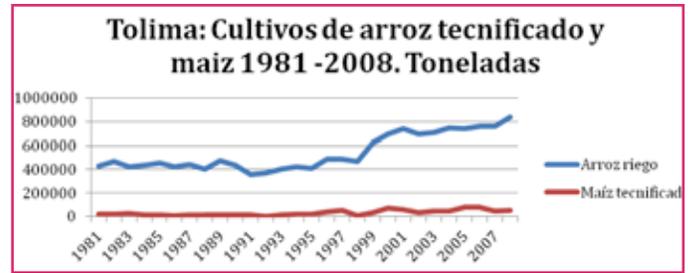
“El café, que alcanzó un precio de hasta US\$2 la libra en 1986, registró un precio de US\$0.55 en 1993, en los mercados internacionales. De otra parte, el desempleo sufrido por la crisis cafetera implicó que en tan sólo durante los años 92 y 93, el país perdiera cerca de 72.000 empleos en la actividad. Esta evidente disminución de ingresos fue suplida parcialmente por los buenos precios de la amapola en ese mismo momento, los cuales llegaban a US\$1.500.000 por kilo de látex”²⁰.

El cultivo tuvo presencia permanente aproximadamente hasta el año 2000. A la fecha, la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, Unodc, no registra presencia de ningún cultivo ilícito en el departamento del Tolima. Y los territorios que se encontraron influenciados por los cultivos ilícitos han puesto empeño en el cambio de cultivos y en la rentabilidad de los mismos, como el caso que se observa en el municipio de Planadas, donde los habitantes de corregimientos como el de Gaitania han logrado sustituir los cultivos ilícitos y hoy mantienen una iniciativa asociativa para la producción de café especial.

El plan del Tolima destina sus tierras principalmente a la ganadería y al arroz. Dicha opción productiva se asumió en especial por las condiciones del suelo, lo que trajo consigo un incremento en el área sembrada y en su producción. Es de anotar que el cultivo del arroz se asocia al del maíz, si bien no en la cantidad de producción sí en las prácticas sobre el suelo, pues, intercalándose con las cosechas de arroz, se siembra el maíz para ‘dar descanso al suelo’ e iniciar nuevamente el cultivo de arroz.

Como puede observarse en la gráfica 7, el cultivo de arroz ha tenido un aumento sostenido en la producción, con caídas leves en determinados momentos de la historia, en especial durante el tránsito de la década del 80 hasta el 2000, período a partir del cual inicia un aumento constante en la producción, que se mantiene hasta el 2008. Así, los cultivos pasaron de producir 430.000 toneladas en 1981 a 838.742 toneladas en el 2008, es decir que casi se duplicó la producción en 26 años. Si bien no se cuenta con las cifras para identificar el aumento del área sembrada, sí existen evidencias de mejoramiento de la semilla y la dotación de la misma por parte de Fedearroz para aumentar la capacidad de producción en un mismo espacio.

20 González José Jairo y Luis Hernando Briceño. Escenario amapolero en el sur de Colombia, en: Revista Mamma Coca. Bogotá 2000. Pag. 18.



Fuente: Elaboración propia a partir de series de datos de Fedearroz.

El cultivo de arroz no vincula de manera permanente un número determinado de trabajadores y, en su mayoría, las funciones que se dan de manera manual son de siembra, abono y fumigación, pues las labores de recolección, así como las que tienen que ver con arado, se hace mediante maquinas, aunque todo depende de la extensión del cultivo, pues procesos como el de la fumigación, abono y siembra se pueden hacer de manera mecanizada.

El cultivo de arroz, sin embargo, se ha sobrepuesto a la variedad de cultivos que se daban sobre el plan del Magdalena, entre los que se encontraban el algodón, el sorgo y el tabaco, todos estos disminuyeron su producción de manera agresiva en este mismo periodo. Con el monocultivo de arroz se encontraron nuevos riesgos ligados especialmente al monopolio del mercado tanto de la semilla como de la comercialización y la venta.

“Para que uno pueda sembrar arroz tiene que comprarles la semilla y los fertilizantes...ellos le dan a uno todo, le mandan un técnico para que revise y luego uno también tiene que venderles a ellos...”²¹

Así, la concentración de las funciones en el proceso de producción y comercialización del arroz en empresas privadas ha traído consigo el incremento de los precios de la semilla, de los insumos y poco control sobre la compra de las cosechas. En el mismo sentido, el proceso de venta de arroz en el país también se ha concentrado, siendo el 30% del mercado de los Molinos Roa y Flor Huila. Estas empresas regularon los precios del mercado para el consumidor final del producto, en lo que sería, según la Superintendencia de Industria y Comercio, una violación al principio constitucional de la libertad de competencia²².

21 Entrevista a “El Cabo”, pequeño arrocero del municipio de Ortega. Noviembre de 2014.

22 La Superintendencia de Industria y Comercio mediante resolución 16562 de 2015 sancionó a los mencionados molinos. Ver en: <http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/RESOLUCION%2016562.pdf>

Respecto a los cultivos de ladera diversificados (ver gráfica 8), estos cumplen un papel fundamental: por un lado mantiene formas de vida tradicionales relacionadas con el autoabastecimiento, tienen relaciones de producción amigables con el suelo y posibilitan la sostenibilidad económica de los productores según los periodos de cosecha que tengan los productos. Por otro lado, cuando hay una tendencia muy fuerte a monetizar todos los procesos en la vida rural existen especializaciones por parte de los productores, quienes de manera mayoritaria siembran dos o tres productos que se compenetran en un mismo espacio.



Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Agricultura.

En cultivos como el café es común observar surcos de plátano o de banano, que complementan la canasta familiar y que genera ingresos para el productor de manera periódica. El fenómeno es similar en fincas que producen frijol y siembran maíz en una vega cercana o tienen vacas que, mediante la leche, posibilita autoconsumo y cierto sustento diario.

“Hombre, es que cómo va a ser que uno ve la gente que baja hasta el pueblo a comprar una cebolla, un plátano... Eso es que uno ya no sabe trabajar la tierra o que se ha vuelto perezoso, sabiendo que todo se puede dar en la misma finca, ahí en frente de la casa...”²³

Productos como el cacao, la caña panelera y el frijol han aumentado la producción en términos generales durante 1981 y 2008, aunque en los tres puede observarse un descenso que se dio entre 91 y el 94, que en términos generales se encuentra en el contexto de la apertura económica en términos generales. La caña y el cacao no mejorarán los niveles de producción por encima de 1991, hasta donde existe información disponible (ver cuadro 2).

23 Entrevista a William Henao, vereda Zelandia. Líbano Tolima. 2014

CULTIVOS DE LADERA EN TOLIMA					
1991 – 2008 -Toneladas					
Año	Banano	Cacao	Caña panelera	Frijol	Plátano
1981	-	2100	30100	2500	202500
1982	-	1900	25800	2100	88000
1983	-	2200	33800	3150	99000
1984	-	1968	34000	2140	110000
1985	-	1720	49000	1480	110000
1986	-	2185	46300	1490	85500
1987	-	2612	63000	1550	90000
1988	-	2260	61900	1700	85000
1989	-	3076	99076	1900	97500
1990	-	3368	81353	4500	72687
1991	-	4555	82773	8832	149937
1992	20000	3480	89421	7315	184720
1993	27352	3240	83161	5282	191709
1994	32851	3224	70716	7400	199656
1995	980	3310	63275	9616,6	223178
1996	19852	3521	66044,9	9986,8	233640,3
1997	15890	3484	61626,1	12149	236854,5
1998	16986	4033	66145	8088,2	200565
1999	9661	4424,7	68782	10884	234581
2000	11416	4562,9	73547,5	12035	250385,5
2001	16107	5531,9	79850	14485	299786
2002	24402,5	3857	76286	9713,6	263066
2003	27756,4	3775,1	82887	14015,2	259515
2004	29146,4	3741,1	76474	14589	261501
2005	16092	4235,7	78809,2	25269,3	264079
2006	23030	3813	101516	13894	272387
2007	18441	4442	74544	15381	255291
2008	13385	4545	70858	10194	165808

Cultivos como el del banano, que en 1992 registraba una producción de 20.000 toneladas, cerró el año 2008 con 13.385 toneladas, mientras el cultivo de plátano aumentó su producción de manera progresiva desde 1991, en una tendencia que permanecería con unas fluctuaciones pequeñas hasta el año 2007. En el 2008 la producción descendió de 255.291 a 165.808 toneladas, sin embargo, de acuerdo con conversaciones con la Federación de Platanicultores de Colombia – Fedepalcol - la seccional que se mantiene en el Líbano-, en los últimos años ha aumentado la producción... *“La gente aprende a sembrarlo (el plátano) entre el café. Nos estamos tecnificando y eso va haciendo escuela.”²⁴*

24 Entrevista a don William Henao, responsable de FEDEPLACOL en el Líbano. 2014.

Ahora, sobre los agricultores pesa una gran incertidumbre, especialmente en lo que corresponde a las decisiones tomadas a nivel nacional para abrir el comercio internacional con los TLC y para regular el uso de semillas con la Ley 970 del 2010, en la que se establecen reglas para el uso, la comercialización y producción de las mismas.

**Cambios en usos del suelo:
la locomotora minero energética.**

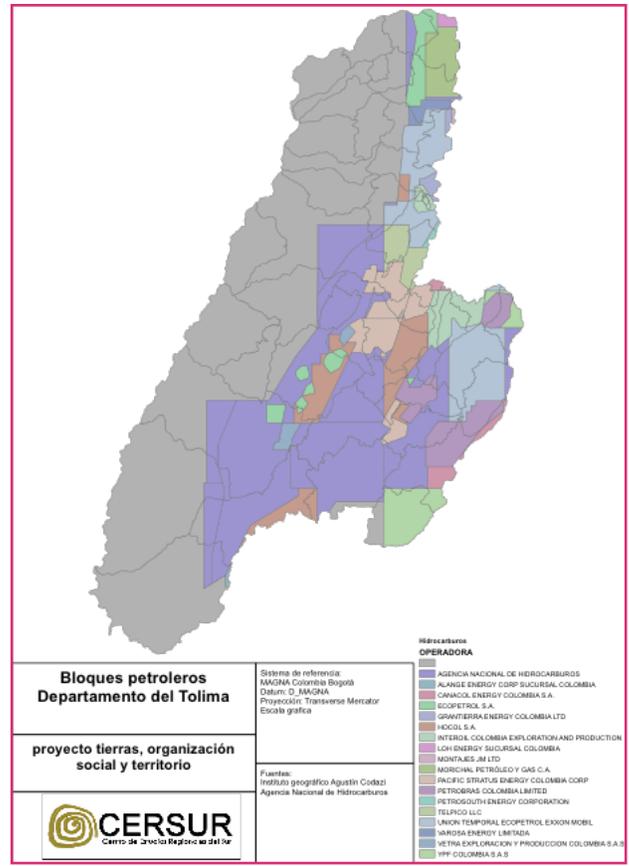
Sin duda, una de las más notorias fuentes de conflictividad en el departamento es la política pública sobre los recursos mineros, energéticos e hídricos. Es importante prestar atención a la locomotora minero energética, que toma expresión en lo local mediante proyectos como el de La Colosa, la mina El Porvenir, la hidroeléctrica del río Amoyá²⁵, la hidroeléctrica en construcción en el municipio de Planadas, entre otros proyectos que se impulsan para el departamento y que, al día de hoy, están causando cambios relevantes en el uso del suelo y en las prácticas productivas locales.

El aumento de la exploración petrolera, sumada a una concesión relevante para actividades de exploración y explotación minera, son sin duda las mayores preocupaciones de los líderes locales, las cuales sumadas con la construcción de hidroeléctricas en las laderas departamentales han causado movimientos en las prácticas de la población, las cuales tienen múltiples impactos sobre el tejido social construido.

Resulta clara la existencia de un mapa de intervención para la industria minero energética, con unos bloques de exploración y explotación para empresas nacionales y extranjeras (ver mapa 2). La existencia de las condiciones geológicas que permiten la conformación de minerales, hidrocarburos y fuentes hídricas ubica todo un panorama de infraestructura física y de oferta de servicios, que va desde la construcción de vías de comunicación hasta la creación de batallones energéticos.

Las condiciones en la que se presentan los recursos han evidenciado tres regiones de intervención: a) la explotación de hidrocarburos tiene sus bloques de exploración y explotación en el valle interandino del Magdalena y de sur a norte del departamento, subiendo por la cordillera oriental (Ver mapa: Bloques petroleros Departamento del Tolima); b) la minería se presenta con más intensidad sobre la cordillera central, donde la práctica de extracción artesanal se ha dado desde épocas precolombinas, factor que motivo procesos de colonización

25 En ese sentido el Instituto Latinoamericano para una sociedad y un derecho alternativo –ILSA– con la investigadora Diana Betancourt han trabajado los impactos sociales y ambientales de las hidroeléctricas en el sur del Tolima, especialmente en el caso de Chaparral. Lugar desde el que manifiestan nuevas formas de apropiación del territorio y expresiones de la espacialidad capitalista.



como el antioqueño²⁶; c) el proceso de explotación hidroeléctrica aprovecha las condiciones geográficas de las laderas de cordillera que posibilitan la construcción de embalses a más bajo costo o que permite el uso del agua mediante técnicas diversas, como en el caso del río Amoyá, donde se realiza a filo de agua.

De acuerdo con el informe del Encuentro Regional para la Paz del Tolima-Huila, realizado en Chaparral, “hoy el Tolima reporta que 404.602.2 de sus 2.356.200 hectáreas. Han sido entregadas para labores extractivistas por medio de 713 títulos mineros, a noviembre de 2013, y 526.107.2 hectáreas están por entregarse ya que (a diciembre de 2013) había 441 solicitudes de títulos mineros²⁷”.

Un caso relevante respecto a la participación social sobre la construcción del territorio, y con esto la posibilidad de construir Estado desde las comunidades, es el movimiento que se presentó en el municipio de Piedras, en el centro del departamento, limitando con el departamento de Cundinamarca: en este municipio se iniciaron conflictos por la minera, a raíz de exploraciones no

26 Santa, Eduardo. Arrieros y Fundadores. Edición Cosmo. Bogotá, 1961.

27 Véase: informe del Encuentro Regional para la Paz del Tolima-Huila, Chaparral, Tolima, noviembre 6 y 7 de 2013, en donde organizaciones sociales, institucionalidad y empresa privada se reunieron para conversar métodos para la paz territorial.

autorizadas que se estarían realizando en el corregimiento de Doima para buscar un punto en el cual realizar el proceso de lixiviación del oro²⁸. Los pobladores señalaban a la multinacional Anglo Gold Ashanti, que tiene presencia en la región.

La inconformidad de la comunidad obedeció a la falta de información y consulta para la realización del proceso, lo que condujo a bloqueos en las vías y protestas que motivaron la intervención de Cortolima con una orden de suspensión contra las actividades de la multinacional, por no contar con los permisos necesarios y por considerar que las actividades podrían afectar las fuentes de agua de la región. Esta actitud fue respaldada por la Gobernación Departamental. En respuesta, la multinacional minera demandó a Cortolima. Posteriormente se hizo una consulta popular para que fuera la comunidad la que se pronunciara sobre si quería o no el proceso de explotación en la región. 3.007 ciudadanos votaron, de un potencial de votantes de 5.105. 2971 votaron en contra de la minería y 24 lo hicieron a favor²⁹.

En este caso fue clara la participación ciudadana que se manifestó para reglamentar de manera legal y organizada la administración del territorio. Tener en cuenta y respetar este tipo de decisiones de desarrollo territoriales sin duda es un prerrequisito para lograr altos niveles de participación informada que garanticen la paz del país. La comunidad en el ejercicio de su ciudadanía se pronunció para asumir el papel político que le señaló la constitución del 91, decidiendo sobre la región y dialogando por los medios legales sobre lo que a su consideración debe ser la planeación del entorno. Sin embargo, la respuesta del Gobierno nacional a través del Ministerio de Minas y Energía fue el decreto 0934 del 9 de mayo del 2013, según el cual los departamentos y los municipios no pueden proferir restricciones a la minería desde sus Planes de Ordenamiento Territorial. A juicio de algunos analistas, negarle a la región la posibilidad de ordenar el territorio y de participar en la construcción de su modelo de desarrollo es negativo en la democratización del Estado.

Son cuatro las principales preocupaciones sociales sobre la implementación de un modelo de desarrollo basado en la extracción y en la implementación de megaproyectos. La primera tiene como base la conciencia ambiental, que interpreta las intervenciones sobre el territorio con impactos negativos en el ecosistema, especialmente por el uso de insumos y el manejo de desechos que no se integran a la tierra sino que causan consecuencias a corto, mediano y largo plazo en la fauna y en los humanos.

La segunda preocupación es económica, que se liga a la imposibilidad de desarrollar actividades productivas que se integren al proyecto minero energético que se construye. Preocupa también el encarecimiento de los costos de vida en

28 Proceso químico en el cual se separa el oro de la roca, mediante el uso de un disolvente líquido. En el caso de la minería de aurífera se acostumbra el uso de agua y cianuro.

29 Para mayor información, se puede consultar en Verdad Abierta.

el municipio ante la llegada de trabajadores foráneos y ante la “bonanza” en cuestión. Adicionalmente esta la presión de la sostenibilidad, que se asocia a la posibilidad del reconocimiento o no de las actividades económicas y las afectaciones que estas tuvieran con el cambio de labores de la población, así como la obligación de venta de los predios afectados por las declaraciones de utilidad pública que acompañan las intervenciones.

“un problema con la minería acá (en el Líbano) es que hay mucha gente peligrosa metida en eso. Y eso, con lo que se ha vivido acá, nunca es bueno”³⁰.

Se alude de manera constante una preocupación cultural, que menciona especialmente los impactos en el tejido social, en razón al cambio de la vocación productiva de la región y las inevitables transformaciones de labores al que se verían abocados los habitantes. Así, el que era agricultor de una parcela pasa a ser celador de un pozo o quien fuera lechera, se hace cocinera de los puestos de trabajadores.

Finalmente, existe el dilema que articula las incertidumbres descritas con el reconocimiento de derechos territoriales, pues los habitantes de un municipio afectado mantienen una relación con el territorio, han hecho intervenciones en el espacio, lo han transformado y se lo han apropiado culturalmente. Además, construyen un lugar con una comunidad, un lugar común donde son soberanos y donde generaron ciertas condiciones para habitar. Mientras tanto, la decisión inconsulta de construir un megaproyecto, provocando un cambio en el uso del suelo, desconoce la construcción previa de la comunidad sobre el territorio y en ese sentido deja en incertidumbre el proyecto de vida. Una decisión que ordena el territorio y promueve cambios de manera inconsulta siempre generará conflictos. Uno de ellos, el desconocimiento a la consulta previa a la cual tienen derecho las comunidades indígenas -Convenio 169 de la OIT.

Existen tres expresiones de la población tolimense donde puede leerse su postura sobre la industria minera energética: primero, la existencia de un fuerte movimiento ciudadano, articulado en el Comité Ambiental del Tolima, que ha sostenido posturas muy críticas sobre proyectos como el de la Colosa³¹ o el Triángulo del Saldaña. Una segunda expresión se da en el Encuentro Regional de Paz, en donde organizaciones de la sociedad civil, empresa privada e institución conversaron a cerca de las condiciones para lograr la paz territorial. Y una tercera expresión se da en las lecturas sociales de los lugares donde se están desarrollando procesos de intervención.

30 Testimonio de líder ambiental del Líbano, anónimo, 2015.

31 Al respecto Justina Pinkeviciute plantea que el proyecto de la Colosa ha sido diseñado para evitar formas de participación ciudadana sobre los problemas circundantes. Manifiesta que la creación de normatividad, que impida decidir de manera informada y directa sobre proyectos que se suscriban al territorio de habitación y a lugares comunes en términos ambientales, atenta contra el derecho a la participación.

Capítulo 2 Dinámica del conflicto y la construcción de paz territorial

Los esfuerzos que están realizados el Gobierno nacional y las guerrillas de las Farc-ep desde las conversaciones de La Habana, tendientes a poner fin al conflicto armado interno, parten del sentimiento y el análisis generalizado de que este tiene expresiones regionales y subregionales muy diferenciadas en el espacio y en el tiempo. Sin duda, el concepto de ‘paz territorial’ -introducido por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz- recoge, en buena medida, la perspectiva a tener en cuenta en los diálogos.

Este enfoque territorial no solo es el reconocimiento a los esfuerzos realizados en medio del conflicto por los territorios y sus pobladores para mitigar los efectos de la guerra, sino también para desarrollar iniciativas de paz regionales.

Así lo han señalado los últimos coordinadores de la ONU en Colombia. El entonces coordinador Bruno Moro lo dijo: «el conflicto colombiano se ha desarrollado esencialmente en las regiones, allí están sus víctimas, se ha destruido el tejido social, se ha debilitado la capacidad institucional del Estado, se ha dado espacio al abuso del poder y al uso de la fuerza... Trabajar la paz a través de las voces de sus líderes, campesinos, indígenas, afrodescendientes, mujeres, jóvenes y sindicalistas es la forma

de fortalecer el tejido social»³². Y también fue enfático el actual coordinador de la ONU, Fabrizio Hochschild, para quien la paz debe realizarse con las regiones. “Es evidente la importancia de la actuación local en la construcción de paz, definir las necesidades desde adentro, determinar cuáles son las particularidades que justifican la adaptación de políticas y programas estatales y proyectar retos particulares para cada región... Muchas veces se habla de paz territorial, pero gran parte de las iniciativas que se han tomado vienen de Bogotá hacia las regiones. Las iniciativas que nacieron desde las regiones son lo que va a ser clave para lograr la verdadera paz”³³.

Las regiones han presentado sus propuestas en diferentes espacios. Poco después de la inauguración de la Mesa de Conversaciones, se realizaron unas Mesas Regionales para contribuir al fin del conflicto (en total 18 mesas, entre 2012 y 2013), una iniciativa de las Comisiones de Paz con el apoyo de la ONU y en particular del PNUD para sensibilizar sobre el proceso y recibir las propuestas ciudadanas.

32 Entrevista a Bruno Moro, Agencia EFE de noticias. Noviembre 12 de 2012

33 Entrevista a Fabrizio Hochschild, El Tiempo, Abril 2014

Igualmente, la Mesa de Conversaciones les solicitó a la ONU y a la Universidad Nacional organizar y sistematizar unos foros nacionales y regionales, que se cumplieron entre 2012 y 2014, para que la ciudadanía presentara sus iniciativas sobre las temáticas de desarrollo agrario integra, participación política y víctimas.

Adicionalmente, numerosas iniciativas se han realizado desde Bogotá y en las propias regiones y distintas organizaciones no gubernamentales de los ámbitos nacional y regional han llevado a cabo distintos eventos, seminarios y foros orientados a analizar y discutir el proceso de conversaciones que se cumple en La Habana en la perspectiva del desarrollo y la paz territorial³⁴.

Desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en alianza con la Redprodepaz, la Ruta Pacífica de las Mujeres y otras organizaciones de la sociedad civil, se realizaron durante el año 2014 un total de 12 Encuentros Regionales Para Paz para generar un proceso de alistamiento de las regiones para el posconflicto o la transición y contribuir al fortalecimiento y la movilización de los procesos de construcción de paz territorial. En uno de estos encuentros, el correspondiente al Tolima y el Huila, se realizó en Chaparral, sur del Tolima, se pretendió identificar los procesos sociales, las plataformas y agendas territoriales disponibles en las regiones para la construcción de paz.

También se promovieron encuentros de mandatarios departamentales y municipales con el propósito de estudiar el rol de las regiones, provincias y municipios en el proceso iniciado en La Habana. En efecto, desde finales del 2012 los mandatarios y mandatarias por la Paz señalaron que: "Desde los territorios del conflicto armado sentimos la obligación de contribuir a que esos acuerdos sean realidad, que la paz que se propone se traduzca en inversión social, justicia, democracia y restitución de derechos. Contribuye a la legitimidad del proceso de paz una institucionalidad local democrática y fortalecida y una sociedad civil deliberante y participativa. No queremos contemplar pasivamente negociaciones de paz entre adversarios armados. La gobernabilidad de la paz requiere consensos locales, la territorialidad de la paz, requiere agendas regionales"³⁵.

Estos encuentros, mesas y foros nacionales y regionales partieron del reconocimiento de que había que romper con los

34 En este contexto y dentro de los varios eventos organizados en el país, para la región surandina y amazónica se realizó en diciembre en Neiva, por parte del Programa de Desarrollo y Paz del Huila y el Piedemonte Amazónico, HUIPAZ, en alianza con Plataforma Sur y el CERSUR, el foro denominado, "Diálogos del Sur", retos y desafíos del posconflicto.

35 Declaración de alcaldes (as) y gobernadores (as) reunidos en Bogotá 28 de septiembre de 2012

paradigmas de participación de la llamada sociedad civil que se circunscribía a los gremios, medios de comunicación y, en menor medida, a las universidades. El espectro de la participación en la discusión y análisis de las condiciones para la construcción de paz se amplió a organismos no gubernamentales, plataformas regionales de desarrollo y paz y a movimientos incipientes de organizaciones de base territorial y popular que han venido conformándose y consolidándose autónomamente y que cuentan con reconocimiento como actores reales de la vida nacional y regional.

Territorialización del conflicto en el Tolima

Si bien gran parte de los conflictos del país, como los del departamento, tienen sus orígenes en los profundos desequilibrios sociales, la exclusión política y en la ausencia de políticas efectivas para superarlos, su expresión territorial difiere según las propias condiciones históricas, geográficas y de capacidad de organización de los actores armados para ejercer la violencia.

Fue el bipartidismo, que ocupaba el poder mediante el Frente Nacional, que carecía de aceptaciones regionales, que era incapaz de ejercer soberanía en el territorio y que poco involucraba en el desarrollo económico a la población nacional, el principal responsable de la violencia que desde mediados del siglo XX se vive en el país.

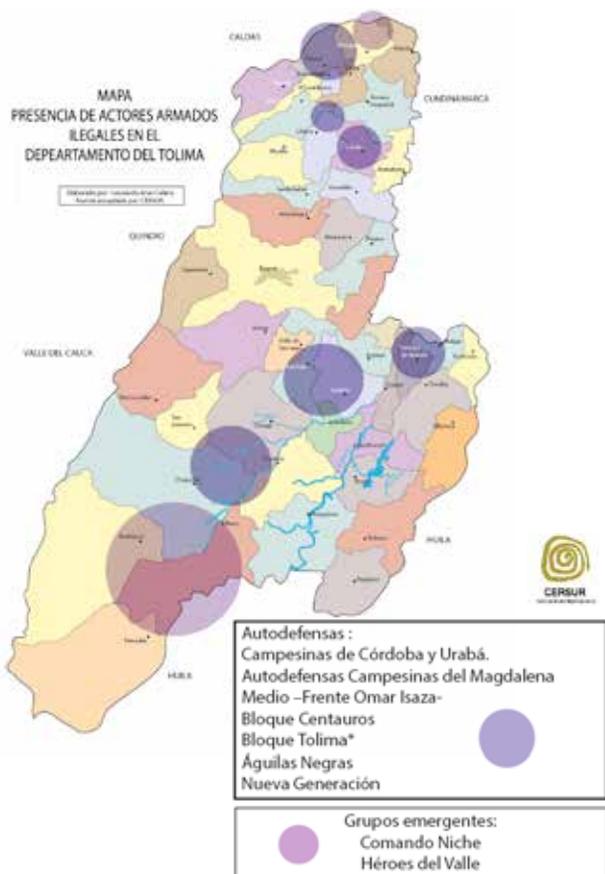
Esta violencia se transformaría paulatinamente en el conflicto social armado que tiene expresiones en la guerra que protagonizan guerrillas y Estado porque en Colombia toda confrontación se terminó sin que nada cambiara. Por eso, el fin de una, implicaba el inicio de otra.

La orografía departamental fue también un punto que aprovecharon los violentos para permanecer en la región, razón que explica por qué luego de 50 años y de la ejecución de múltiples estrategias militares, las guerrillas -y ahora también los grupos paramilitares o bandas criminales- continúan desplazándose por la cordillera central entre los departamentos del Valle, Cauca, Quindío y Caldas; por la cordillera oriental, por el páramo del Sumapaz hacia los llanos orientales, cruzando por el Huila y por Cundinamarca; y hacia el Macizo colombiano y el piedemonte amazónico, por Huila y Caquetá.

Cada región tiene, entonces, una parte de la historia del conflicto y parte de sus víctimas. Todos los municipios saben que el conflicto recorrió sus veredas montañosas y los habitantes se saben partícipes activos o pasivos de tiempos violentos.

No es repetitivo mencionar que los grupos armados ilegales hicieron presencia de manera diferenciada. Los actores armados, como los movimientos sociales, son cíclicos, están compuestos por sujetos y tienen una historia. La historia de los grupos guerrilleros en el Tolima ha sido relatada de manera eficiente por distintos investigadores sociales, dentro de los que deben mencionarse a Carlos Medina Gallego, Medofilo Medina, Jose Jairo González, Gonzalo Sánchez, Alfredo Molano y más recientemente por investigaciones realizadas por el Centro de Estudios Regionales del Sur y por la Fundación Ideas para la Paz³⁶.

Pero la población adolece del conocimiento sobre los elementos que llevaron al departamento del Tolima a ser el centro de operaciones del paramilitarismo para la cuenca alta del río Magdalena (ver mapa 3). En un rompecabezas que no termina de tener todas sus piezas puestas mientras no se logre identificar el papel de ciertos sectores de los empresarios, del Estado y de los pobladores en la promoción de los grupos armados ilegales.



36 El documento de la FIP resulta muy pertinente para la construcción de la historia del conflicto y las vulneraciones de derechos humanos en el departamento en la medida que relata hechos recientes y esboza, aunque brevemente pasajes y consecuencias de la historia que no han terminado de ser contados. Ver en: http://archive.ideaspaz.org/images/DocumentoMonitoreo_ConflictoArmado_Tolima_Julio2013.pdf

En un ejercicio de complementariedad con la descripción territorial que se hizo en el primer capítulo de este documento, a continuación se hará una descripción regionalizada sobre las condiciones del conflicto y los actores que intervienen en este. La explicación se hace de manera concisa y permite identificar los responsables de la violencia más significativos y las potencialidades para la construcción de paz (Gómez. 2013)³⁷.

Región Norte: En límites con Caldas y Cundinamarca, por la rivera del Río Magdalena, en 1997 subieron los grupos paramilitares, que provenientes de Puerto Boyacá y la Dorada harían parte de los sectores del Bloque Central Bolívar, que llegaban para tomarse territorialmente las cordilleras cafeteras, sobre las que -hasta finales de los años 90- la guerrilla del ELN tendría incidencia.

En el norte hubo expresiones del paramilitarismo con implicaciones en la política y que han sido mencionados en varias oportunidades por los desmovilizados, como apoyos económicos en el proceso de consolidación del Bloque Tolima en la región. La concertación se hizo con grupos políticos tradicionales del departamento para cooptar el Estado. Actualmente hacen presencia espaciada grupos armados consolidados, después de la desmovilización, y adscritos a “Los Rastrojos” y el “Comando Niche”³⁸.

Región de los Nevados: Esta región está compuesta por gran parte de la zona cafetera del norte del Tolima y los municipios del Líbano, Herveo, Villahermosa, Murillo, entre otros. Es herencia de la colonización antioqueña y se encuentra vinculada al cinturón cafetero, al tiempo que se comunica con el país por la vía alterna al departamento de Caldas.

La guerra en la región ha sido tensa y silenciosa pues ha existido presencia de cinco actores armados distintos. Quizá el grupo más nombrado es el ELN, a través de su expresión “Los Bolcheviques”, que perdería terreno a partir del primer quinquenio de la década del 2000. Las Farc-ep tuvieron una expansión importante en la zona a partir del Frente Tulio Varón y la Columna Móvil Jacobo Prías Alape, pero en medio de la confrontación se verían reducidos y replegados. El Ejército Revolucionario Popular –ERP-, con el Frente José Rojas originario en los Montes de María, llegó entre 1990 y 2000, aunque no tuvo mucho reconocimiento por parte

37 *Ibidem*. Página 25.

38 Durante el año 2012 el Comando Niche amenazó de muerte a varios alcaldes y personeros municipales de municipios de las zonas norte, centro y sur del departamento, según declaraciones públicas del defensor del pueblo departamental. Ver en: <http://www.ecosdelcombeima.com/regionales/audio-19075-defensor-del-pueblo-el-tolima-santiago-ramirez-ratifico-las-amenazas-a-person>

Tolima: análisis de las conflictividades y construcción de paz

de la población y sus prácticas se vieron influenciadas por el bandidaje. En la región se conocen como “los costeños”.

Así mientras el ELN se consolidaba con el Frente Bolcheviques del Líbano con un radio de acción amplio que llegaba hasta el valle interandino, bajando por la Cordillera Central, las Farc-ep, con el Frente Tulio Varón, entraría de sur a norte sobre la misma cordillera a hacer incursiones cada vez más profundas en el norte del departamento, donde coparía espacios territoriales del ELN.

De manera simultánea, los grupos paramilitares iniciaron la consolidación en el departamento y entre 1997 y 2003 lograron presencia en toda la zona norte y establecer una base de operaciones en la vereda Delicias, del municipio de Lérída, colindando con la vereda Zelandia, del municipio del Líbano. Así lo recuerdan muchos pobladores:

“Hombre, es que en la guerra se conoce a la gente. Imagínese usted que llegaban los paras y ponían un retén, acá mismo en el camino de la vereda, y lo bajan del carro... a cualquiera, a un vecino, a cualquiera, y decían “es que usted es guerrillero” y todo el mundo callado. Nadie decía “él es mi compadre” o “trabaja en la finca de aquel lado”... Gente que uno conocía de tiempo y la dejaron matar por puro miedo porque era gente que no tenía que ver con nada...”³⁹

Región Centro: Los municipios del centro - con mayor concentración de población y de capital del departamento- serían zona de confrontación constante entre las estructuras ilegales que, desde el sur y el norte, emprendían campañas de extorsión y reclutamiento. El eje es la capital Ibagué, secundada por el Espinal, zona de tránsito obligada para llegar a la capital del país y al puerto de Buenaventura.

“...A mí me parece muy extraño por que llegan tantas investigaciones de Bogotá a indagar por los grupos guerrilleros pero no se ha hecho un trabajo grande todavía en el que se relate cómo fue el paramilitarismo en el departamento y qué personas estuvieron implicadas en eso...”⁴⁰

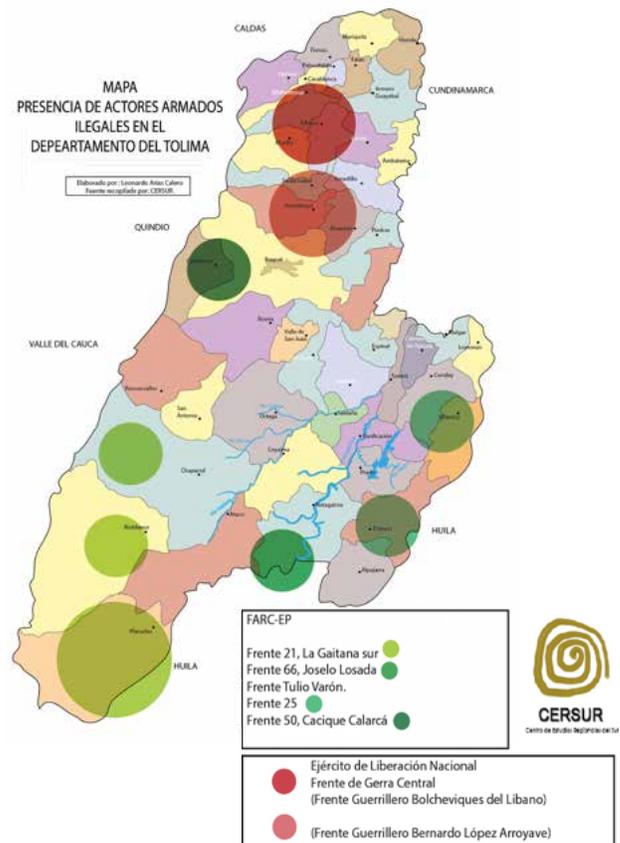
En esta región las estructuras armadas ilegales que hacen presencia hoy, con mayor o menor intensidad, están articuladas a las Farc-ep mediante la Comisión Cajamarca, el frente 21 “La Gaitana”, el 50 “Cacique Calarcá”, la Columna Móvil Miller Salcedo, la Compañía de Finanzas Manuelita Saenz y, más débilmente,

39 Entrevista a poblador de la vereda Zelandia, del Líbano Tolima. Marzo de 2013.

40 Entrevista a Santiago Ramírez, Defensor del pueblo de Tolima. Abril de 2013.

el frente Tulio Varón⁴¹ (ver mapa 4). Existe también presencia difuminada del paramilitarismo, ligado especialmente a unidades de Los Rastrojos y Los Urabeños. Aunque se registra la presencia del Frente Bernardo Arroyave del ELN este no parece actuar constantemente en la zona mediante procedimientos militares.

Si bien las actuaciones de grupos paramilitares o de disidencias de estos no se manifiestan de manera articulada ni permanente, las declaraciones de la Defensoría del Pueblo denotan ciertas estructuras que realizan trabajo de control social, articulados a grupos de desmovilizados de las AUC y vinculados a los dos grandes bacrim, Los Rastrojos y Los Urabeños.



Región Sur Oriente: Esta región del departamento hace tránsito entre los departamentos de Cundinamarca, Huila y Meta, configurando un corredor del conflicto que tenía como objeto posicionarse en las zonas limítrofes de Bogotá, a las que se llega a través del Páramo del Sumapaz. El frente 25 de las Farc-ep hace presencia en esta región, que desde hace 50 años se encuentra en permanentes conflictos civiles (ver mapa 4). El Bloque Centauros de las AUC hizo tránsito del oriente de Colombia a Tolima

41 Esta información ha sido extraída principalmente de barrios de prensa, de la información del ODDR y de trabajo de campo.

con hombres que, desde Lejanías y Mesetas, venían a cerrarle espacio a la guerrilla. Este bloque se articuló al Bloque Tolima, en concordancia con órdenes emitidas por Carlos Castaño, y tuvo como base el municipio del Guamo⁴².

Región Sur: Es quizá la región más estudiada del Tolima. Los temas que se han abordado en una amplia literatura son: su relación con la historia de los levantamientos campesinos, que más tarde llevaría a la creación de las Farc-ep; la extensión de su territorio, que representa gran parte de la geografía departamental; las formas particulares en las que el Estado ha hecho presencia y, además, los modelos de acción colectiva de las Juntas Administradoras Locales (JAL) y otras asociaciones.

El vacío que dejó el Estado en el territorio fue ocupado por el grupo armado que, protegido por la topografía y la población, tuvo a los máximos comandantes en el Cañón de las Hermosas, que comunica al Tolima con el Valle del Cauca y el Cauca.

El conflicto armado ha victimizado a la población local, quienes en medio del conflicto tienen afectaciones a sus derechos, por todos los actores armados. Mención especial merece la población indígena de la región que se concentra, en gran medida, en los municipios de Coyaima, Natagaima y Ortega, quienes fueron acusados por el Bloque Tolima de las AUC de ser auxiliares de las Farc-ep.

Por su parte las Farc-ep se mueven mediante el Frente Joselo Lozada entre Ataco, Planadas y Rioblanco; la Columna Móvil Daniel Aldana, desde Ataco hasta Natagaima; la Columna Móvil Héroes de Marquetalia y la Comisión de Explosivistas Alfredo González, estructuras con las que hace presencia en la mayor parte de la región⁴³.

Deben destacarse tres iniciativas sociales muy fuertes en el territorio. La primera es una experiencia de paz exitosa en medio del conflicto: el Cabildo Indígena Páez de Gaitania, la cual firmó, luego de un periodo de confrontación social con la guerrilla de las Farc-ep, un acuerdo de paz que se ratifica cada dos años mediante una celebración popular. La segunda experiencia relevante, que también está asociada a los pueblos indígenas, es el Cabildo

42 Los primeros municipios de toma paramilitar fueron el Guamo y San Luis, en el primero habrían instalado una base y desde allí se desplegaron las operaciones que aumentaron el control territorial sobre los municipios del centro y el sur del Tolima.

43 Como se ha mencionado, el sur del Tolima estuvo vinculado de manera directa durante la década del 90 y principios del presente siglo a los cultivos de amapola y, con ello, a la tumba de bosque para el crecimiento del ilícito, que hoy no representa relevancia en la región. Esta situación cambió a partir de la negociación en el Caguán, momento en el cual se inicia la disminución de los cultivos ilícitos hasta desaparecer totalmente entre los años 2002 y 2005.

Regional Indígena del Tolima –CRIT-, el cual ha logrado llevar a concertación con el Gobierno departamental múltiples propuestas que han generado una Mesa de concertación interinstitucional para conversar, entre muchos aspectos, el problema del desarrollo ligado al Distrito de Riego del Triángulo del Saldaña. Y una tercera iniciativa es Astracatol, una organización agraria campesina que tiene entre sus organizaciones fundadoras una organización indígena e CRIT- y cuenta con una fuerte representación municipal compuesta por subdirectivas y comités municipales (Gómez. 2013).⁴⁴

Los efectos del conflicto

El balance del conflicto evidencia el drama de la guerra: un ejército en confrontación con víctimas en cada bando; una población que es víctima y naturaliza su condición, y una ciudadanía que, en muchos casos, es espectadora de la guerra, se siente aludida moralmente y es víctima estructural del conflicto.

Los tiempos de paz no se han vivido en los periodos de negociación, si no en los momentos de hegemonía de alguno de los actores y con la disputa del control territorial.

Así, en muchos casos, la sociedad ha posibilitado las condiciones para su pervivencia. En otros, ha buscado estrategias colectivas, algunas tácitas, como el silencio, y otras promovidas por liderazgos valientes con la asociatividad. También sobresalen grupos de mujeres, que ante la criminalización de los hombres han asumido el papel público en la presidencia de JAL y en la promoción de iniciativas productivas; grupos asociativos productivos, que se reúnen para enfrentar la pobreza; organizaciones de derechos humanos, que se juntan a hacer denuncia sobre los sucesos locales; sindicatos agrarios; y muchas otras expresiones locales que no solo han resuelto su permanencia, sino que han construido el territorio que hoy habitan.

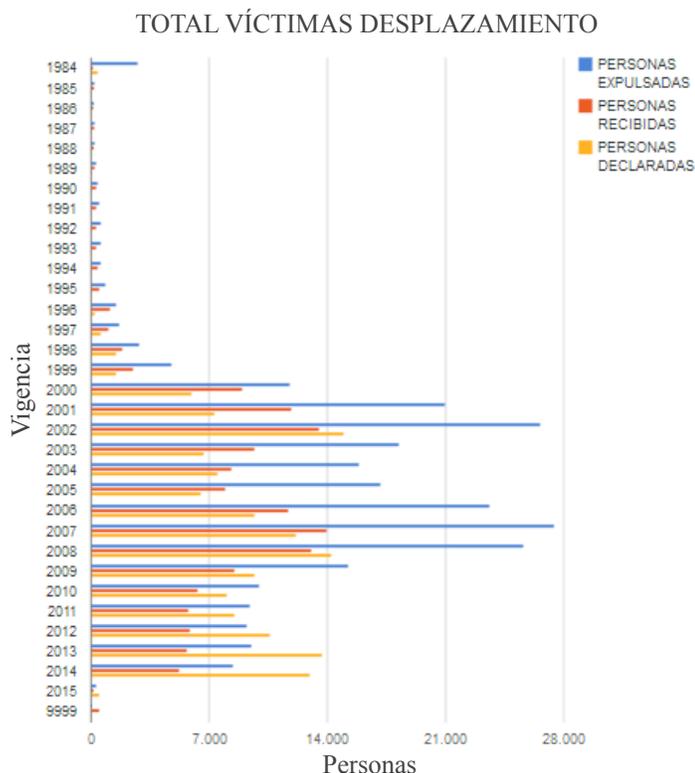
A continuación se presentarán los efectos que ha tejido en la sociedad el conflicto armado, efectos expresados mediante hechos victimizantes que evidencian la dimensión humana de la guerra en Colombia.

Esta información puede contribuir a identificar las rutas a seguir en un posconflicto, en el que la salida negociada al conflicto armado interno dé paso a un proceso de justicia transicional que sea la oportunidad para abordar los problemas de las víctimas de la violencia y de sus víctimas estructurales.

44 Ibidem.

Desplazamiento

El Registro Único de Víctimas – RUV- reconoce, desde “antes de 1985” a junio de 2015, un total de 311.183 víctimas del conflicto armado, de las cuales el 86,3% (268.822) son víctimas de desplazamiento forzado, según el Registro Único de Víctimas.

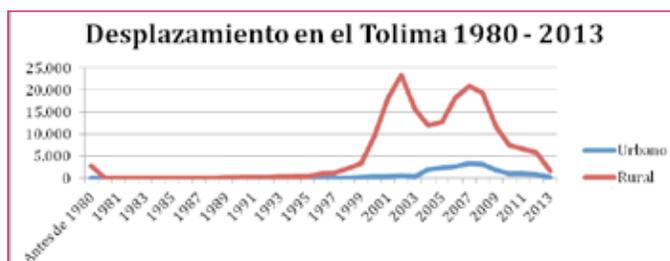


El departamento del Tolima registra un total de 268.822 personas expulsadas y 148.062 personas recibidas entre “antes de 1985” y 1 de junio de 2015. No se observa este fenómeno de violencia como una forma significativa de victimización, sin embargo el departamento sigue la tendencia del sur colombiano, que hace evidente la crisis a partir de 1998 y 2003, periodo en el que se desplazaron 85.366 personas (ver gráfica 9). Es precisamente en estos años que en la región se acentúa el paramilitarismo, crece la guerra del Estado contra una fortalecida guerrilla de las Farc-ep, se inicia la disputa territorial en el norte del departamento entre el ELN y nacientes grupos guerrilleros y, por supuesto, se da inicio y fin a los diálogos de paz en San Vicente del Caguán.

El 2002, que se caracteriza por el cierre definitivo de la posibilidad de diálogos de paz entre el Estado y las Farc-ep, llega con el aumento de la presencia paramilitar, ahora organizada mediante el Bloque Tolima, y el cambio de gobierno de Andrés Pastrana a Álvaro Uribe Vélez. En este año se da una de las expulsiones de población más grande en la historia

departamental, con 29.645 personas, quienes se vieron obligadas a abandonar su hogar. Esta tendencia se mantiene hasta el año 2008, con las oscilaciones propias del conflicto y un subregistro que se hizo evidente durante el tránsito entre el primer y el segundo mandato del gobierno Uribe. Posterior a un leve receso -que obedeció en parte a la desmovilización de los grupos de autodefensas-, el desplazamiento volvió a arreciar ahora por las “bandas emergentes” y, muy especialmente, la intensificación del conflicto Estado-guerrilla en el centro y sur del departamento.

Finalmente, entre 2009 y 2014 se observa una tendencia a la disminución de registros de desplazamiento. En 2012, por ejemplo, se presentaron 10.002 casos de expulsión; en el 2013, 9090 y en el 2014, 8621 (ver gráfica 9).



Fuente: Registro Único de Víctimas –RUV

La diferencia en la afectación de la población rural es evidente y pareciera casi premeditada (ver gráfica 9). Una mirada al desplazamiento en las zonas urbana y rurales muestra que fueron los pobladores agrarios el centro de los vejámenes del conflicto: quizá la coincidencia entre las condiciones de vulnerabilidad estructural junto con el conflicto marcadamente agrario provocaron en esta población, por lo menos, una doble victimización, pues aparte del abandono estatal tuvieron que someterse a la rudeza de la guerra.



Fuente: Registro Único de Víctimas –RUV

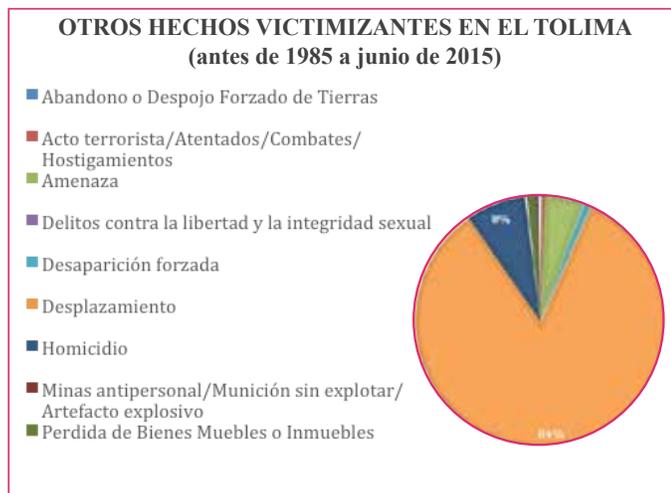
Sin duda, es importante que un proceso de tránsito nacional hacia la paz incluya a esta población como un actor político determinante en la construcción de un nuevo país.

Otros hechos victimizantes

Entre “antes de 1985” y junio de 2015, además del desplazamiento (268.822) hay otras 50.483 víctimas en el Tolima por diferentes hechos victimizantes. De este total el que ha generado más impacto en la población ha sido el homicidio, con 23.798 víctimas, es decir, el 47,11%. Le sigue, las amenazas (15.367), en el 30,4% de las situaciones; la pérdida de bienes muebles e inmuebles (3.982), el 7,8%; y la desaparición forzada, el 5,5% (2.794 víctimas). Importante tener en cuenta el subregistro de información por desconocimiento, miedo o escepticismo de la población víctima.

Por otra parte es importante identificar que 982 personas han denunciado ser víctimas de secuestro, lo que responde al 1.9% de los hechos victimizantes (ver cuadro 3).

OTROS HECHOS VICTIMIZANTES EN EL TOLIMA (antes de 1985 a junio 2015)	
Hecho Victimizante	Total denuncias
Actos terroristas/ Atentado/ Combate/ Hostigamiento	1685
Amenazas	15.367
Delito contra la libertad y la integridad sexual	299
Desaparición Forzada	2.794
Homicidio	23.798
Pérdida de bienes muebles e inmuebles	3.983
MAP -MAUSE	620
Secuestro	982
Tortura	198
Vinculación de niños, niñas y adolescentes	389
Abandono o despojo de tierras	368
Total	50483



Fuente: RUV

Despojo de tierras en el Tolima

El informe de la Unidad de Restitución de Tierras sobre solicitudes de ingreso al Registro de Tierras Despojadas –a 31 de marzo de 2015-, ubica al departamento del Tolima en la segunda posición, respecto al total nacional. De las 75.122 solicitudes recibidas en todo el país, hay 5418 en el Tolima, es decir, 7,2% del total de solicitudes a nivel nacional. Antioquia es el departamento con mayor requerimientos (15.406).

Esta información si bien es impactante resulta incompleta si se tiene en cuenta que en el país hay 94.299,91 hectáreas con orden de restitución, de las cuales en el Tolima se ubican 3.063,47 hectáreas, siendo el 3,2% del total nacional. Hay que aclarar, como la hace la URT, que

“El área reportada por los solicitantes de ingreso al Registro de Tierras Despojadas, en algunos casos varias reclamaciones coinciden con el mismo predio, en otro no reportan extensión del predio...”⁴⁵

La relación entre las solicitudes de restitución y el total de áreas denunciadas se debe entender considerando 3 factores inicialmente 1. La proporción total de las áreas departamentales, 2. Elementos del conflicto armado territorial ligados a la intimidación o no sobre los denunciados y 3. El tamaño promedio de la propiedad en el departamento y las características socioeconómicas de las víctimas.

El abandono, despojo y desplazamiento en el Tolima encuentra varios responsables que pueden dilucidarse parcialmente por la ubicación geográfica del conflicto, pues aun cuando la región tenía territorios de participación mayoritaria de uno u otro actor violento, por las características y dinámica de la guerra, no es fácil tipificar a un responsable. Ejemplo de esto es que el 38% de los denunciados ubican que el agente responsable del desplazamiento y/o abandono son las Farc-ep, un porcentaje reducido denuncia al ELN y finalmente hay una incertidumbre de cerca del 50% en el que no se responsabiliza a estos actores armados y quedan entonces como responsables otros.

Es podemos identificar por lo menos tres casos paradigmáticos que combinan una alta relación entre desplazamiento, despojo y abandono ocurrida en los municipios de Río Blanco, Planadas y Ataco. Después de la violencia de los 50, existió un periodo de tregua en esta región entre los grupos guerrilleros de Limpios y Comunes, coordinados por ‘Mariachi’ y ‘Charro Negro’, en un primer momento, y posteriormente comandados por ‘Canario’ y ‘Tiro Fijo’. Sin embargo, este acuerdo tácito de convivencia que duró más de 30 años por el dominio territorial de las Farc-ep, fue

45 Entrevista a la directora de la Unidad de restitución de tierras – Tolima. Septiembre de 2013.

Tolima: análisis de las conflictividades y construcción de paz

roto a partir de las alianzas e incursiones paramilitares impulsadas desde la Casa Castaño con las “Autodefensas Rurales de Seguridad” de Ernesto Caleño alias ‘Canario, en alianza impulsada por políticos regionales y por los mandos militares de la región. La ruptura de esta alianza tuvo como antecedente la conformación del Grupo paramilitar “El Rojo Atá”, que realizó algunas incursiones en Planadas asesinando a varios pobladores, entre ellos a Humberto Trujillo, transportador muy conocido en la región⁴⁶.

Posteriormente, a finales de los 90, estas bandas paramilitares fueron reagrupadas por la Casa Castaño y los paramilitares de Ramón Isaza del Magdalena Medio, dando origen al Bloque Tolima. Este Bloque entró en guerra abierta contra el Frente 21 de las Farc-ep, comandado por ‘Jerónimo’, guerra que duró cerca de 8 años, hasta la desmovilización del Bloque Tolima en el 2006. Esto desencadenó una nueva ola de violencia, desplazamiento y abandono de tierras en el sur del Tolima (Cersur, 2014)

Esta guerra, en la que hay alianzas entre agentes del Ejército Nacional y los paramilitares contra las guerrillas de la zona, concluye con el control territorial por parte de las Farc-ep en el Sur y la expulsión del paramilitarismo al Norte del departamento.

“Fue Carlos Castaño quien estuvo en el departamento del Tolima y se reunió con grupos de terratenientes y ganaderos en el departamento. Él unificó los grupos paramilitares que venían de los llanos, de Córdoba y de Magdalena Medio. Él llegó en avión a un base militar -me reservo el nombre del coronel que lo recibió porque eso puede traer implicaciones

contra mi vida... Él fue el que convenció a alias ‘Canario’ de que se rearmara nuevamente para, con el apoyo de ellos, combatir a las Farc-ep⁴⁷”.

De esta forma, se configura en el territorio un mapa de diversos actores armados ilegales (ver cuadro 4) con cuota de responsabilidad en el número de víctimas del departamento.

En conclusión, el conflicto armado interno en el departamento del Tolima, como se ha visto, está asociado desde décadas anteriores a las graves perturbaciones sucedidas en la propia estructura, composición y dinámica de la propiedad rural; a los evidentes rasgos de concentración del poder en partidos y fracciones, algunas de estos comprometidos con la parapolítica; al crecimiento y expansión de las guerrillas de las Farc-ep y su posterior disputa por el control territorial con las fuerzas paramilitares de Carlos Castaño y Ramón Isaza, agrupadas en el Bloque Tolima. Estos factores han producido, en diferentes momentos y con diferente énfasis, una crisis humanitaria, de liderazgos, de gobernabilidad y de representación en el departamento, lo que ha dificultado la construcción colectiva de una agenda común de paz y desarrollo regional.

Con todo, como ya es reconocido por la población del territorio y asistentes a los distintos espacios regionales⁴⁸, el actual proceso de conversaciones en La Habana, viene generando las condiciones de confianza y credibilidad necesarias para construir un nuevo escenario de oportunidades, emprender el camino de transformaciones y reformas que el país necesita y, además, si quiere llenar de contenido, desde los territorios, la paz sostenible y duradera.

Presencia de actores armados ilegales en el departamento del Tolima					
FARC - EP		ELN		Paramilitares-Bacrim	
Comando Conjunto Adán Izquierdo (Antes comando conjunto central) (Bloques Oriental, Sur y Occidental)	Frentes: Frente 21, La Gaitana Frente 66, Joselo Losada Frente Tulio Varón. Frente 25 Frente 50, Cacique Calarcá	Frente de Guerra Central	Frentes: Frente Bernardo López Arroyave Frente Bolcheviques del Líbano	Desmovilizados: Paramilitares -AUC-	Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio –Frente Omar Isaza- Bloque Centauros Bloque Tolima
	Columnas Móviles Columna Móvil Jacobo Prías Alape C.M Daniel Aldana C. M. Héroes de Marquetalia			Los Rastrojos	Águilas Negras Nueva Generación
	Compañías Móviles C. M Alfredo González C.M Miler Salcedo			Los Urabeños	Bloque Pijao Conquistadores del Tolima
	Comisiones Especiales: Finanzas: Manuelita Sáenz Política: Rene González Escuela Hernán Murillo Toro Emisora Manuel Cepeda Vargas			Grupos emergentes	Comando Niche Héroes del Valle

Fuente: Centro de Estudios Regionales del Sur –CERSUR-. Año 2013

47 Entrevista a Santiago Ramírez, Defensor del Pueblo de Tolima. Ibagué 2013.

48 Véase al respecto las conclusiones de los Encuentros Regionales para la Paz, promovidos por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en especial el que se cumplió en Chaparral, en noviembre de 2014, correspondiente a las regiones del Tolima_ Huila, y el Foro “Diálogos del Sur, Retos y desafíos del posconflicto”, realizado por Huipaz, en Neiva. Diciembre de 2014.

46 Entrevista a pobladora de la región, Planadas, Febrero 25 de 2013.

Capítulo 3 Análisis de intervenciones y respuestas de los principales actores regionales

El departamento tiene una tradición en organización de varias décadas, desde las campañas de colonización de la bolsa de baldíos internos de la nación, pasando por los sindicatos de braceros⁴⁹ (Sánchez, 1981) y las asociaciones campesinas que luego se articularían a la Anuc, en la década del 60.

Las Juntas de Acción Comunal, resguardos y cabildos, la aparición y consolidación de Asojuntas -Asociaciones de Juntas de Acción Comunal, los sindicatos, las asociaciones productivas y movimientos políticos juveniles, de mujeres, trabajadores campesinos y urbanos se hicieron una expresión que tránsito paulatinamente de lo meramente gremial a lo político y en sus entrañas crecieron movimientos sociales que pasaron de la reivindicación particular a opinar en la política nacional.

En 1990, los campesinos y campesinas cafeteros de todos los departamentos del Tolima protagonizaron las diferentes movilizaciones en las regiones y las tomas a la ciudad de Ibagué, donde se sumaron incluso campesinos de Risaralda y Antioquia,

49 Los sindicatos de braceros articulaban a -quienes entonces fueron- trabajadores de la carga de barcos que navegaban el Magdalena y transportaban productos entre el centro del país y los puertos costeros.

en un momento que tomó un carácter nacional (Rincón, 2005). Esta ola de protestas campesinas en los primeros años de 1990 a 1996 logró motivar agendas, redes y otras alianzas -entre plataformas nacionales, departamentales y locales-, que por algunos años sirvieron como catalizadores de los procesos urbanos y rurales construidos desde los años 70, 80 y 90 y que desembocaron en el impulso decidido a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 (Restrepo, 2015).

Hoy, los actores regionales se mueven de manera diversa, se pueden identificar por funciones, por necesidades, por posturas políticas y, en términos generales, por intereses sectoriales y sociales. Al mismo tiempo hay diversas actuaciones y políticas en la esfera pública que genera reacciones, a veces contrarias, según los actores que participen. Cada grupo tiene fortalezas y debilidades para la incidencia en las decisiones de su interés y tendrán mayor o menor éxito dependiendo del capital social que movilicen (Bourdieu, 1980)⁵⁰. Así, es posible clasificar cinco grandes grupos de actuación, que se enumeran para efectos metodológicos y no por su importancia.

50 Bourdieu, Pierre. "Le Capital Social": en: actes de la recherche en sciences sociales. Vol 31, janvier. 1980.

Los gremios.

El primero se encuentra en los **gremios económicos**, que cuentan con un capital social que se sustenta en los obreros y empleados a los que vinculan en la cadena de comercio y poseen un poder económico importante toda vez que mueven la industria agraria y manufacturera. Adicionalmente, se encuentra el capital financiero que, aunque no podría hallarse vinculado a los gremios económicos, mantiene relaciones directas con ellos pues encuentra en estos a sus socios más importantes. Al mismo tiempo, tienen una gran incidencia política pues intervienen en el proceso electoral con financiación directa y se ven beneficiados, también directamente, en el acceso a programas.

Aunque no es posible generalizar, muchos miembros que conforman este sector tienen reparos frente al proceso de negociación que se está desarrollando con la guerrilla de las Farc-ep, toda vez que fueron uno de los grupos más afectados y, además, tienen altas confianzas en la gestión de las fuerzas militares. Asimismo, muchos se sienten afectados por las actividades mineras que usan parte de las afluentes de agua que les son necesarias para los distritos de riego y se oponen, en su mayoría, a los Tratados de Libre Comercio porque consideran que se verán afectados en razón a la vulnerabilidad de sus actividades, entre las que se encuentran los cultivos de arroz, cereales, la ganadería, el café y la industria textil. De esta afirmación hay que excluir a los grupos financieros por sus intereses en la bolsa de valores y en el mercado de divisas.

Un acápite importante debe hacerse con relación a la Federación Nacional de Cafeteros, pues si bien comparte algunas de las características anteriormente descritas, tiene elementos claramente diferenciales. Está compuesta por un número significativo de familias que, en su mayoría, son pequeños propietarios de fincas cafeteras; tienen relación con la política departamental y nacional y es beneficiaria de subsidios y por su composición popular buscan una transparencia en el manejo de recursos, aunque no dejan de existir inconformidades por parte de familias cafeteras que denuncian preferencias por fincas de mediano y gran tamaño y expresan sus molestias por la intermediación que se realiza mediante bancos y terceros para la entrega de los subsidios.

Hay que tener en cuenta diversas investigaciones, como la del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República⁵¹ y otros de la región, que evidencian que hay empresarios y políticos que tuvieron relación con la consolidación del paramilitarismo a partir del Bloque Tolima y que se han vinculado con el narcotráfico especialmente con los hermanos Ochoa y otros procedentes del Valle.

51 Observatorio de Derechos Humanos Vicepresidencia Presidencia de la República. "Diagnóstico del conflicto en el Tolima 2003 – 2007".

Funcionarios públicos

Un segundo grupo de importancia en el análisis de actores son las instituciones Estatales con sus funcionarios públicos. Son instituciones que representan al pueblo, en los casos de elección popular; o que representan a la burocracia especializada, en el caso de los funcionarios de carrera administrativa. Juegan un papel en la construcción de modelos de desarrollos para la paz, así como en el apoyo a procesos de paz y salidas negociadas al conflicto armado. Recientemente ha cambiado radicalmente la composición de la planta general de la administración pública pues gran parte de las contrataciones que se están realizando para personal se dan bajo la figura contractual de prestación de servicios.

En términos generales, los funcionarios públicos de carrera administrativa son profesionales que han dedicado a cumplir con sus funciones legales, haciendo la aplicación de la política pública nacional y departamental con mediana independencia en razón a la seguridad jurídica que ostentan con su contrato de estabilidad laboral.

Sobre los funcionarios elegidos popularmente hay que señalar que se han hecho elegir, en algunos casos mediante procedimientos que no siempre son lícitos, como lo ha manifestado la Misión de Observación Electoral. Muchos de estos funcionarios generalmente llegan ya con obligaciones para la ejecución de actividades que se vinculan generalmente a los agentes que financiaron económicamente sus campañas políticas y, en mucha menor medida, obligaciones programáticas contraídas con sus electores. El grupo de funcionarios que se vinculan mediante contratos de prestación de servicios ocupan posiciones en la administración pública que van desde las funciones de contratación, las propias de licitaciones o las que ejercen en los territorios de distintas locaciones del departamento.

Este actor cuenta con un capital económico importante que se origina en los recursos públicos; cuenta con un capital social sustentado en las redes clientelares; un capital político que se manifiesta en la posibilidad de tomar decisiones y hacerlas exigibles y un capital mediático, que comunica y arroja una postura oficial. Esto no quiere decir, sin embargo, que estos capitales que puede mover la administración pública sean absolutos pues ni el músculo financiero es infinito ni el capital social le es totalmente "fiel".

Se han evidenciado, como se han señalado, falencias en la composición del personal administrativo estatal y cómo las posturas sobre la construcción de la paz, el papel frente al conflicto y la consolidación del Estado se han visto mediadas por los elementos anteriormente descritos.

Adicionalmente, ha sido constante el vínculo entre actores armados ilegales y personalidades políticas del departamento y funcionarios públicos que han mediado las acciones públicas, según declaraciones ante justicia y paz de uno de los comandantes del Bloque Tolima, “alias Daniel”, quien fue teniente del Ejército Nacional. Según su versión libre, Ciro Chitiva y Danilo González, adscritos a la Policía como comandantes del departamento, le prestaron ayuda logística y militar para realizar actividades delictivas en el Tolima. En la misma práctica, el exparamilitar implicó a Camilo Rodríguez, comandante de inteligencia del Batallón Roque de Ibagué, así como a agentes del CTI y de la Fuerza Aérea. Entre las figuras políticas y los funcionarios públicos que fueron implicadas por el paramilitar se encontraron Luis Gamboa, alcalde de San Luis, entre otros. Luego de involucrar a políticos, militares y otros funcionarios públicos fue asesinado en la centro de reclusión, mediante envenenamiento⁵².

En la construcción de paz y Estado Social de Derecho, los funcionarios públicos han tomado una iniciativa frente a la posibilidad de garantizar un goce efectivo de los derechos y hacer cumplir los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, muchas veces en acciones motivadas por sentencias judiciales. Aun así, también se han observado actitudes que controvierten sus acciones en la construcción de paz y que se ven reflejadas en las escasas respuestas e incumplimientos de acuerdos alcanzados con Gobernaciones e instituciones públicas en las mesas de concertación creadas ante procesos de movilización de comunidades campesinas e indígenas en el departamento.

“...Pues a decir verdad eso (los acuerdos) no se han cumplido porque aunque nosotros hablamos con delegados de la gobernación y se llegaron a acuerdos para aumentar las posibilidades, lo escrito no se ha adelantado. Además, como luego el Ministerio de Agricultura tomó las conversaciones con la Cumbre Agraria pues yo creo que eso ha hecho que no nos cumplan a nosotros, acá en el departamento...”⁵³

La influencia de los grandes proyectos sobre las administraciones locales se evidencia de manera constante en la convivencia de éstos con la institución que al promover la inversión de capital en el municipio eludiendo, sin embargo, su función pública de atender las denuncias de los habitantes sobre los posibles abusos o impactos ambientales negativos generados por dichos proyectos y sus empresas responsables. Ejemplos de esto son muchas de los efectos que han generado en los municipios mineras nacionales o extranjeras, legales o ilegales, que tienen presencia allí.

52 Declaración dada en la versiones libres de los días 3, 4 y 5 de diciembre del año 2008 ante la fiscal de justicia y paz María Patricia Meza, en la ciudad de Bogotá.

53 Entrevista con directivo de la seccional sur de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima -Astracatol.

Aunque se registra un aumento de empleo en varios municipios, al mismo tiempo hay denuncias sobre escasa seguridad laboral de los empleados y constantes quejas por la afectación de fuentes de agua y el entorno ocasionado por las empresas mineras.

Con lo anterior se intenta reflexionar sobre cómo un mismo actor social puede tener diversos comportamientos según condiciones particulares y de qué forma un actor social es susceptible de influencias de actores legales e ilegales, que provocan comportamientos en ocasiones ilegales y representan acciones negativas para la construcción de paz en el departamento.

Aunque hay funcionarios públicos que, como se dijo, son comprometidos con la paz y los derechos humanos, hay muchos otros que son protagonistas de prácticas negativas al interior de instituciones del departamenta.

La organización social comunitaria

El **tercer** actor departamental que resulta incidente en la construcción de paz departamental es, sin duda, la organización social comunitaria, que tiene una doble característica:

- Aquella que vincula a individuos identificados por pertenencia simbólica, material o ideológica a un grupo social y/o político. Bajo esta caracterización se ubican a todos los grupos sociales, diferentes al gremio, que se asocian con el fin de lograr mayores éxitos para sí mismos y la comunidad. Entre ellas están las Juntas de Acción Comunal, los partidos políticos, organizaciones religiosas, sindicatos, asociaciones de género, organizaciones de víctimas y asociaciones indígenas, entre otros. No tienen un fin lucrativo y su objetivo es fortalecer el grupo social con el fin de incidir en política pública, acceder a programas de asistencia estatal, realizar programas autogestionarios -como mingas y convites- y desarrollar actividades para promover valores.
- Aquellas organizaciones que son pequeñas asociaciones productivas o económicas, que si bien hacen parte de un gremio se alejan de la organización gremial macro-cefálica, con el fin de constituirse como grupo independiente que medie la relación entre la producción-trasformación- comercialización para mejorar las condiciones del grupo. Ejemplo de este tipo de asociaciones son la asociaciones cafeteras municipales, asociaciones de servicios varios, asociaciones de pequeños productores agropecuarios y cooperativas, entre otros.

Este actor tiene medios económicos limitados para la realización de actividades toda vez que se componen, en su mayoría, por grupos humanos excluidos, la clase trabajadora, el campesino, el indígena... Pobladores que carentes del reconocimiento efectivo de su ciudadanía que se organizan para acceder a derechos de los que se han encontrado privados (Revelo y Villegas, 2009). Sin embargo, poseen un capital social importante. Los despojados de derechos son la mayoría⁵⁴, personas con condiciones limitadas y cuyas expectativas por cumplir son lograr el acueducto del pueblo, la pavimentación de una vía, la constitución de un resguardo indígena, la declaración de una Zona de Reserva Campesina, etc..

Es común que las organizaciones comunitarias no cuenten con canales de intervención efectivos o que, al usarlos, éstos estén mediados por prácticas de corrupción⁵⁵, así que los medios que emplean son la movilización social y la protesta ante determinadas crisis. Sin embargo, el resultado ante este intento de construcción de Estado -mediante la participación directa-comúnmente fracasa luego de que se regula la participación en mesas de concertación.

Las organizaciones comunitarias, especialmente las vinculadas al campo y a las asociaciones de víctimas, acostumbran tener un papel activo en la construcción de iniciativas de paz. Como regla general, pero no por unanimidad, apoyan procesos de negociación dialogada al conflicto armado interno y tienen propuestas sobre cómo debería ser el territorio que habitan o que habitaron en condiciones de post guerra. Generalmente, esa idea de la paz está ligada a un modelo de desarrollo distinto que vincula la posibilidad de trabajar en condiciones de dignidad para lograr mayores niveles de rentabilidad. Así, el campesino, el indígena, el desposeído relacionan la paz con la posibilidad del fin de la pobreza y con el aumento de oportunidades para el desarrollo.

Los grupos asociativos que se dedican a la rehabilitación productiva en la región tienen como objetivo contribuir a la superación de las condiciones de miseria del territorio que intervienen. Se convierten, en sí mismos, en propuestas de desarrollo para la paz que esperan ser alternativa a las cadenas de comercialización centralizadas. Por ejemplo, es común la existencia de decenas de asociaciones campesinas para la producción de café especial, que tienen como meta cultivar, procesar y comercializar el grano colombiano por fuera del monopolio de la Federación Nacional de Cafeteros-FNC, pues algunos consideran que la experiencia

54 Se observó en el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas que gran parte de la población urbana y rural vive en condiciones de precariedad, lo que la obliga a "rebuscarse" para lograr acceso a mejores condiciones. Y en este papel del rebusque la organización es uno de los medios fundamentales para acceder a condiciones de vida, haciendo uso del apoyo mutuo.

55 Quizá la práctica más común en este sentido se presenta cuando, por ejemplo, ante la iniciativa del presidente de una Junta de Acción Comunal de lograr la pavimentación de una vía funcionarios públicos, como concejales y alcaldes, pide una cuota - "la mordida"- del recurso total asignado.

de este organismo no representa mejoras en el bienestar de los cultivadores. En el mismo sentido, se observan asociaciones ganaderas pequeñas, mataderos comunitarios y acueductos veredales, entre otras.

En el departamento se pueden encontrar muchas organizaciones -y diversas en su contenido y según sean del norte o el sur-, muchas de cuyas experiencias e iniciativas han sido sistematizadas por el Centro de Estudios Regionales del Sur. Así, en los municipios del norte del departamento hay una extensa tradición en organización social gremial y productiva, si bien han priorizado más la segunda sobre la primera. Mientras tanto, el sur del Tolima mantiene una constante correlación entre la organización social gremial y la productiva, donde no se entienden como espacios separados de plano sino que participan colectivamente de escenarios compartidos (Gómez, Ramírez, Restrepo y otros 2015).

De esta forma, en el sur las JAL y las asociaciones de juntas son el eje central de la vida en los municipios pues ayudan a resolver los conflictos entre los habitantes, promueven trabajo comunitario para solucionar problemas, como los de vías, o administran proyectos del Estado y otras entidades. Entre tanto, en los municipios del norte, las JAL y las Asojuntas sufren grandes niveles de desestructuración, como en el municipio del Líbano, donde no existe la figura de la asociación de juntas y aunque hay iniciativas para constituir las, no han prosperado.

En el norte, las asociaciones productivas cumplen el papel de intermediarias entre la institucionalidad y la empresa privada. Son asociaciones fuertes que se han constituido alrededor del café, especialmente, pero que incluyen grupos de mujeres productoras de caña, aguacate o plátano y comités veredales, entre otros.

"...La clientelización misma de las Juntas de Acción Comunal (1962)⁵⁶ que fueron y son explotadas electoralmente por los partidos tradicionales, conllevó a la destrucción de sus antiguas capacidades autogestionarias y las solidaridades conexas (el bipartidismo ahondó los conflictos sociales por las disputas evidentes de sus líderes o comuneros). De este modo, las formas comunitarias actuales se reducen a una gestión clientelar de recursos públicos y, esporádicamente, a actividades de "convites" (trabajo colectivo) para hacer mantenimientos de acueductos"⁵⁷ (Martínez, 2013. Pág. 167).

56 En 1959 se dicta el Decreto Presidencial 1427, por el cual se impulsan las campañas de acción comunal en el territorio nacional. Respecto a la visión optimista sobre el papel de la acción comunal para ese momento, como clave del "desarrollo", véase a Fals (2010[1960]:100-101). (Cita obra original Rivillas, 2013).

57 Martínez Rivillas, Alexander. 2013. Geosistemas, territorios y paisajes de Ibagué. Un estudio de la sostenibilidad del desarrollo territorial desde una propuesta de geografía híbrida. Programa de Doctorado en Geografía. UPTC-IGAC. Bogotá, Colombia Pág 167

La diversidad de organizaciones tanto en el norte como en el sur del departamento es una de las características del Tolima. Por dar un ejemplo, estas son algunas organizaciones que trabajan en el sur:

- **Emisora Comunitaria Hacayumacu.** Nace en el año 2009. Su director, Roque Rodríguez, de la corporación Hacayumacú, y uno de los socios de la corporación señala cómo se rescata el vocablo pijao: *Haca*, que significa ‘bienvenidos’; *Yu*: ‘espíritus’; *Macu*: ‘buenos’.
- **Asociación de Mujeres por un progreso para el campo-Asmuprocám.** Según la coordinadora de la asociación, Marta Lucía Aroca Zabala, esta nace en el año 1999 con 126 madres, quienes deciden obtener vivienda e inician todo un proceso de constitución legal con la asesoría del personero municipal de la época, en el año 2002. Luego, con ahorros programados y un fuerte trabajo colectivo se lograron recursos para estudios de suelo, sismo resistencia, acueducto, alcantarillado, andenes, sardineles, electrificación, entre otros.
- **Asociación Manos de Mujer.** Es una organización de mujeres campesinas e indígenas, conformada en el año 2003 y legalmente constituida como organización desde el año 2011. Es una organización que tiene actividades en Coyaima y Natagaima. En Natagaima está compuesta por 84 familias y trabaja en cinco veredas: Anchique, Guasimal, La Palmita, Pueblo Nuevo y Cocana. Inició sus actividades pensando en la idea de construir los acueductos de las veredas. Posteriormente, se dedicó a realizar tareas por el cuidado de su región y creando posibilidades para la consecución de sus alimentos a través del cultivo de sus tierras. Son aproximadamente más de 200 mujeres quienes, al lado de Claudina Loaiza, en Coyaima, y Alba Luz Trujillo, en Natagaima, lideran diversas actividades como la recuperación y preservación de semillas, los sistemas agroforestales, tareas para la gestión del agua y la promoción de las tradiciones como la cestería, la chichería y la alfarería.
- **Asociación Unidos con la Familia y la Comunidad de Natagaima-Asufaceonac.** Es una entidad sin ánimo de lucro, con personería jurídica, que empezó en el año 2000, con programas del Instituto de Bienestar Familiar. Administra hogares comunitarios y un Centro de Desarrollo Integral. La población sujeto de su accionar son los niños y la comunidad en general.
- **Comité intersindical.** Es una organización que se crea alrededor de la década de los años 80 básicamente por la falta de agua potable, un problema que la población padecía hasta por 15 días consecutivos. En su inicio, la organización

fue dirigida por personajes representativos del municipio, como el sacerdote de la época, el párroco Evaristo Núñez, quien fue un apoyo incondicional en todos los procesos que se promovieron. Contaron también con la orientación de Raúl Rojas, dirigente del Partido Comunista de la época; y Arnulfo Barrios, un reconocido docente, entre otros. Han organizado y asistido a grandes manifestaciones y movilizaciones apoyando la lucha del sector campesino en aras de mejorar las condiciones de vida de la población rural.

- **Comité de Ganaderos de Chaparral.** Nació en el año de 1994, en una reunión en la que ganaderos como Gustavo Sánchez, Vicente Peralta, Fermín Campos y otros ganaderos pensaron que podría organizarse para mejorar las condiciones del sector ganadero.
- **Sintragritol.** Raúl Rojas fue una de las primeras personas que emprendió la lucha por el problema del agua que afrontaba la población chaparraluna. Para ello empezó a trabajar por la construcción de un acueducto para su municipio. Posteriormente, cuando se creó el Comité intersindical, se incorporó a dicho comité.
- **Emisora Ambeima Estéreo.** Se constituye legalmente en el año 2000 y para la época contaba con pequeños equipos de sonido, lo cual no fue impedimento para continuar con su transmisión. Invitaban a personajes muy reconocidos del municipio y se convirtió en un referente. Para esa fecha, la Central Hidroeléctrica del río Amoyá fue un gran apoyo para la emisora.
- **Red de mujeres Chaparralunas.** Esta organización articula expresiones de las mujeres del municipio de Chaparral, que promueven la garantía de derechos efectiva para estas. Realizan múltiples trabajos que se relacionan con la capacitación en no violencia contra la mujer, el acceso a formas de generación de valor mediante proyectos productivos, como la Moringa, y se vinculan departamental y nacionalmente mediante la Iniciativa de mujeres por la Paz –IMP–.
- **Conciliadores en equidad.** Se crea el 16 de junio del 2008 con el ánimo de dar solución a los conflictos que tienen que ver con lo transigible, conciliable y resistible, los cuales están contemplados en la Ley 640 del 2001 y 1395 del 2010. Dentro de sus logros se contemplan la resolución de más de 500 casos de este tipo.
- **Asociación de trabajadores campesinos del corregimiento El Limón -Astralimón.** Desarrolla un proceso que promueve el mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos y visibilizando la importancia de la labor rural para el desarrollo de la vida en las ciudades. Se articula

con la organización Astracatol y actualmente piensa en la participación política como un escenario para incidir desde lo local en la administración municipal.

- **Asociación de productores de café especiales, El Cable.** La asociación lleva constituida 10 años, señala su presidente Fernando Albeiro Gómez Aguirre, quien lleva ocho años en esa labor. “La asociación El Cable es porque hubo una historia del cable aéreo que pasó por aquí de Herveo a Manizales, entonces por ahí era que bajaba la gente, dice la historia. Y se le pone El Cable en homenaje... a ese cable que existió en esa época. Se pudo integrar a la gente de cultivos de café especiales”.

Los indígenas

Los indígenas son, por otra parte, un grupo poblacional muy fuerte que habita de manera mayoritaria varios municipios ubicados en la zona riveriega del sur del departamento. La mayoría están adscritos a comunidades Pijaos y articulados en asociaciones de carácter departamental, en Cabildos y Resguardos, como figuras administrativas, territoriales y culturales⁵⁸.

La organización de este proceso social y sus iniciativas de incidencia territorial en el Tolima ha estado marcada por la búsqueda del reconocimiento del gran resguardo de Ortega y Chaparral, lucha que se inicia a principios del siglo XX con Quintín Lame, y es retomada por las múltiples organizaciones indígenas que -en las recuperaciones de tierras- insisten en la necesidad de que este territorio ancestral vuelva a ser de sus herederos originarios, el pueblo Pijao. Este ha sido un territorio ancestral de comunidades indígenas Pijaos, quienes mostraron una feroz oposición a la invasión española. El centro territorial del pueblo Pijao fue la provincia de Amoyá.

“Hacia 1621, la corona Española reconoció los primeros resguardos bajo las escrituras No 657 del Gran Resguardo de Ortega y Chaparral, que quedó ubicado en lo que entonces era la viceparroquia de Chaparral y el caserío de Ortega, jurisdicción del cantón del Espinal y el resguardo de Natagaima y Coyaima, bajo la escritura No 125 y en jurisdicción del cantó de Purificación y con el pueblo de indios de Coyaima como eje”⁵⁹.

58 ICBF. Diagnóstico situacional de la etnia pijao de ortega, Natagaima y Coyaima. (2010) Pág. 25

59 Sin lugar a dudas una de las experiencias de construcción de paz más importantes que existen en el departamento es el proceso de paz entre el Cabildo Indígena Nasa We de Gaitania, en el municipio de Planadas, y las Farc-ep en 1996.

Hay que tener en cuenta que el despojo de los territorios ancestrales y la dominación de los pueblos indígenas fueron hechos sistemáticos desde la llegada de los españoles. Los pueblos del sur del Tolima quedaron sometidos al ‘terraje’, que consistía en “una forma de explotación de la mano de obra a la que estaban forzados los indígenas, en especial aquellos que habían sido desposeídos de sus resguardos, quienes, en calidad de terrajeros, le pagaban al hacendado en días de trabajo el uso y cultivo de pequeños globos de terreno dentro de la hacienda”.

El indígena Manuel Quintín Lame inició en la primera mitad del siglo xx una lucha por el reconocimiento de los pueblos indios como herederos del territorio y como sujetos políticos de América Latina. La primera estructura organizativa liderada por Lame fue llamada *la quintinada* y se basó en la oposición de los indígenas organizados al pago del terraje, reivindicando como propias las tierras de los hacendados caucanos y tolimeses. *La quintinada* tuvo su momento más fuerte entre 1914 y 1917. En este último año sus líderes fueron apresados, asesinados y acusados de sedición. Quintín Lame estuvo en la cárcel hasta 1921 cuando fundó, en el sur del Tolima, el pueblo San José de Indias con familias coyaimas y natagaimas del extinto gran resguardo de Ortega y Chaparral.

En el Tolima, el movimiento liderado por Quintín adoptó el mote de ‘Lamismo’ y tuvo tres momentos fundamentales en su desarrollo como estructura organizativa: entre 1922 y 1930, cuando el Lamismo se vincula con el partido socialista revolucionario liderado por María Cano y José Ignacio Sánchez; entre 1931 y 1939, época en la que se dio una división al interior del Lamismo entre indígenas comunistas y socialistas e indígenas que luchaban por la causa indígena, que tenía como eje fundamental el respeto a la Ley 89 de 1890 y el reconocimiento del gran resguardo de Ortega y Chaparral y del fuero especial indígena; y una época final en la que la violencia liberal conservadora genera graves afectaciones a la organización indígena en el sur del Tolima.

Es tal la lucha del líder indígena, que en los municipios de Ortega, Natagaima, Coyaima y Chaparral, la figura de Quintín Lame es referente de acción política del pueblo Pijao (Espinosa). Así mismo los lugares de las reuniones de los Lamistas hacen parte de la cartografía ancestral del pueblo Pijao, conformada por cuatro referentes: 1) el cerro del Pacandé, 2) los cerros de los abechucos, en Ortega, 3) la iglesia de Coyaima, que era un centro ceremonial indígena, y 4) el cerro de Chaparral (Ramírez, 2015).

A partir de la década de los 80 y 90, comunidades indígenas de Ortega y Coyaima iniciaron procesos de recuperación de tierras a través de vías de hecho, procesos jurídicos o mediante la gestión con el Estado. En 1982 tuvo lugar en el Tolima el primer encuentro nacional indígena, que dio lugar a la creación de la Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC, y

en donde se trataron temas como: la recuperación de las tierras de los resguardos, el impulso y consolidación de los Cabildos, el desarrollo de los programas económicos comunitarios, la promoción de los programas de educación y salud y la exigencia al INCORA del pago de las mejoras de terratenientes y colonos para la entrega saneada de los resguardos.

Importante resaltar, como se ampliará más adelante, que en medio de la guerra se firmó, en el año 1996, el único pacto de paz vigente en Colombia hasta hoy, entre las guerrillas de las Farc-ep y la comunidad indígena Paéz de la región de Marquetalia, que venía siendo utilizada por los militares en su lucha contrainsurgente. En efecto, durante varios años las Fuerzas Militares suministraron armas a algunos indígenas de la comunidad con el fin de expulsar a esta guerrilla de la región. Después de más de 5 años de enfrentamientos, en el que murieron varios combatientes y civiles campesinos e indígenas, el Gobernador del Resguardo Indígena, Virgilio, y el comandante del Frente 21, Jerónimo Galeano, decidieron, con el acompañamiento de la Iglesia, ponerle fin al enfrentamiento y sellar la Paz.

A partir de los años 90 el Consejo regional indígena del Tolima sufrió algunas fracturas por diferencias ideológicas y de accionar político entre sus líderes y lideresas. En este momento, en el sur del Tolima hacen presencia 4 organizaciones indígenas:

-La Asociación de Cabildos Indígenas del Sur del Tolima - ACIT. Es una organización que reúne a 54 comunidades y 27 resguardos indígenas de los municipios de Natagaima, Coyaima, Ortega, Ataco, Chaparral, Espinal, Guamo, Prado, Purificación y Saldaña. Tiene como propósito la defensa de los territorios y los derechos de las comunidades indígenas. La ACIT fue creada en el año de 1989 y ha desarrollado actividades como la implementación de planes de vida en comunidades, propuestas de desarrollo agrícola y pecuario, recuperación y conmemoración de prácticas culturales, formación y cualificación de las comunidades en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Actualmente se comunica de manera constante con organizaciones de nivel nacional, como la Coordinación Nacional de pueblos, organizaciones y líderes indígenas.

-El Consejo Regional Indígena del Tolima –CRIT. Es la organización indígena más antigua del Tolima y se conformó en 1981 para impulsar el fortalecimiento de los cabildos indígenas y de su organización regional, teniendo como base sus derechos sociales, económicos, políticos, culturales, ambientales para la construcción de sus espacios de poder. Esto mediante la reivindicación de su autonomía, de su territorio y de su particular jurisdicción, con el fin de mejorar la calidad de vida de toda la población del Tolima.

-La Federación Indígena de Cabildos Autónomos del Sur del Tolima –FICAT. Es una organización conformada por 12 cabildos, ubicados en su mayoría en el municipio de Coyaima y en menor proporción en Natagaima. Busca la defensa del territorio, la recuperación de las prácticas culturales Pijao y el mejoramiento de las condiciones de las comunidades asociadas. En los municipios priorizados - Natagaima, Coyaima y Ortega- hay una fuerte presencia de organizaciones indígenas. En Coyaima existe una población indígena de 14.032 personas; en Natagaima, de 9.657; en Ortega, de 10.785 y en Chaparral, 891 habitantes.

La capital y su organización

En el municipio de Ibagué la organización tiene unas características particulares. Su condición de capital departamental le da dinámicas muy urbanas y, además, la individualización de los sujetos. Sin embargo, la zona rural de Ibagué que habita alrededor del cañón del Cócora, el cañón del Combeima y la Picalaña tienen dinámicas naturales de las zonas rurales.

Hoy, en el municipio de Ibagué, se le atribuye a la organización social múltiples logros, que van desde la construcción de barrios a modo de asentamiento -que luego se integran a la ciudad, hasta la construcción de acueductos veredales que se urbanizan. Según cálculos de diversas fuentes, en Ibagué hoy día el 30–40% del alcantarillado lo construyó la misma comunidad con sus formas organizativas, así como también lideró e impulsó las extensiones de redes eléctricas y la construcción de escuelas.

Pero la pérdida de expresiones partidarias en la política, al ser suplantadas por relaciones clientelares, lleva a que el trabajo comunitario pierda terreno frente a la ddiva del Estado. Muchas de las interlocuciones en el municipio para los programas sociales que están dirigidos a víctimas, principalmente, se dan a través de organizaciones de víctimas que hacen el papel de intermediarios⁶⁰.

Algunas de las organizaciones sociales que se pueden encontrar en Ibagué son⁶¹.

- **Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima, Astracatol.** Luego de una gran marcha realizada por miles de campesinos en el municipio de Ibagué el 07 de

60 Ante la compleja situación de las víctimas, con la ley de víctimas se han creado mesas departamentales y municipales, estructuras aún débiles compuestas por pocas organizaciones que no tienen capacidad operativa suficiente para representar a una población tan grande.

61 Siguiendo la recopilación realizada por el PDP Huipaz y el CERSUR.

octubre del 2007, se acordó, en asamblea, que era necesario tener una asociación que representara y defendiera los derechos de los campesinos, la cual se conforma el 18 de diciembre del mismo año. Sus miembros se han visto inmersos en fenómenos de persecución política y han sido estigmatizados, pero estas dificultades no han sido motivo suficiente para flaquear en su objetivo: adelantar procesos educativos, a través de capacitaciones, con el propósito de formar a los campesinos en derechos humanos y equidad de género. De ahí que las mujeres sean consideradas el eje principal de la asociación y pieza clave para replegarse por las veredas, corregimientos y municipios cercanos ayudando a dar credibilidad y representación a la organización.

- **Colectivo Lente Popular.** Es un espacio de información y formación, con carácter de escuela permanente en temas sociales, populares y alternativos. Nace con la necesidad de articular trabajo desde Ibagué con la Agencia de Prensa Colombia Informa, en el año 2014. Está conformado por estudiantes de comunicación social y periodismo de la Universidad del Tolima, egresados de otros programas de humanidades y algunos líderes sociales de la región.
- **Agencia estudiantil de prensa.** Organización de corriente periodística de estudiantes de la Universidad del Tolima y dinamizadora de la lucha gremial y política de los universitarios. A través de los medios virtuales, promueve la información y genera opinión alrededor de los problemas de la universidad pública y de los sectores sociales y populares de Ibagué y del Tolima, en general. A su vez, trabaja por educar, organizar y movilizar al estudiantado universitario en defensa de sus derechos y reivindicaciones, así como en aras de vincularlo a las luchas del movimiento social y popular colombiano. Están articulados a la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia (FEU-Colombia) y al Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.
- **Movimiento social y político Marcha Patriótica-Tolima.** Ha sido constituido como lugar de confluencia de organizaciones campesinas, indígenas, de trabajadores sindicalizados e informales, así como de expresiones juveniles, estudiantiles y de mujeres que actúan en el departamento. Tras la constitución de la Marcha como movimiento social y político el 23 de abril de 2012, las agrupaciones sociales del Tolima que participaron constituyeron MAPA-Tolima como una forma de simplificar las luchas en defensa de la riqueza natural, el territorio y la vida, así como contra la privatización del patrimonio público del departamento y por la paz con justicia social, soporte de su proyecto político: “la segunda y definitiva independencia”.
- **Corporación de organizaciones sociales del Tolima – Corcultura.** Se conforma en el año 2000 como una iniciativa de consolidación de organizaciones gremiales, constituidas por grupos culturales, ambientales y cívicos. Su objetivo es desarrollar iniciativas conjuntas que fortalezcan los procesos en cada una de las organizaciones y del ámbito ciudadano, con un alto valor en el enfoque de derechos y deberes ciudadanos como visiones de desarrollo humano integral. En dicho proceso se han consolidado acciones e iniciativas como el Encuentro Nacional de Poesía y Narrativa en “Ibagué en flor”; el Concurso literario del Tolima; el Plan de fomento a la lectura y la escritura “Mientras más leo más veo”; la integración de diferentes instituciones públicas y privadas para la construcción del proyecto “Ecoparque Monumento a la Paz”; y la apertura de la sede del Centro Cultural Corcultura capítulo Tolima, que se proyecta para hacer replicado en otros departamentos del país y consolidar un proceso nacional, cultural, ambiental y ciudadano con miras a los retos y futuros de la paz y la cohesión social del país. Igualmente se promueven iniciativas para la recuperación de escenarios físicos que enriquezcan el patrimonio material en el ámbito cultural y ambiental como una posibilidad de contribuir con iniciativas ecoculturales a los diferentes procesos sociales.
- **Sindicato de trabajadores agrícolas del Tolima - Sintragritol.** Desde la obtención de su personería jurídica el 21 de septiembre de 1971, el sindicato de profundo arraigo campesino e indígena de la región, filial a la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria –Fensuagro, lucha por la defensa del pequeño productor, jornaleros y campesinos sin tierras, la defensa de la figura de las Zonas de Reserva Campesina para la región, la resistencia contra la megaminería y las hidroeléctricas. Desde el 2013 ha participado en la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo -MIA, impulsando desde la región la defensa por los derechos del campesinado e indígenas.
- **Comité ambiental en defensa de la vida- CADV.** Es un espacio de coordinación de varias organizaciones de carácter social, grupos ambientalistas, corporaciones, fundaciones, partidos políticos, instituciones, colectivos, medios de comunicación y personas independientes. Su objeto es impulsar acciones públicas en defensa de la tierra y la vida ante medidas económicas que han lesionado la región, particularmente impulsando la denuncia y el rechazo a políticas macroeconómicas sobre proyectos de megaminería y minería contaminante.
- **Iniciativa de Mujeres colombianas por la paz – IMP.** Es una alianza de mujeres, de organizaciones de mujeres

de diferentes sectores con el objeto de participar, incidir y decidir en los procesos de diálogo y negociación política del conflicto armado en Colombia. Desde sus inicios en el departamento del Tolima, en el año 2002, IMP tiene presencia en los municipios de Natagaima, Chaparral, e Ibagué, incidiendo en espacios como la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Planeación, el Consejo Comunitario de Mujeres departamental y las JAL de diferentes veredas. Dentro de sus logros más importantes están la política pública de mujer y género en el departamento, con ordenanza 024 de 2009; la elaboración de una agenda de mujeres; la capacitación y formación y otras acciones de incidencia política para mujeres.

- **Fundación Yapawaira.** Surgió como resultado de un proceso de expansión de la Cooperativa de trabajo asociado gestión & desarrollo. Desde el 2011, la fundación es una entidad sin ánimo de lucro, sin filiación política, gubernamental o religiosa, que trabaja por un cambio en las comunidades menos favorecidas. Ha concentrado su trabajo en comunidades en estado de vulnerabilidad, bien porque son desplazadas y están en proceso de reubicación o porque se encuentran en riesgo de desplazamiento, entre ellas comunidades indígenas (Embera Chamí, Nasawes'x y Nasa paez), campesinas y comunidades urbanas reubicadas en Tolima y Caquetá.

Adicionalmente, existen otras organizaciones sociales que hacen presencia en el departamento y que impulsan iniciativas para apoyar a grupos ciudadanos con características específicas, bien sean niños, mujeres, etc. Y con la ayuda de agencias de cooperación internacional, entidades internacionales plurinacionales, Estados y embajadas extranjeras, el Estado colombiano. Entre las instituciones que hacen parte de esta red se encuentran:

Incide. Iniciativa ciudadana por la democracia que promueve la formación política de jóvenes en la región, especialmente en Ibagué, oriente, sur y algunos municipios del Norte del Tolima

Pazivil. Programa Regional de Paz y Reconciliación que impulsa acciones ciudadanas para visibilizar a las víctimas y los procesos

de reconstrucción de la memoria.

Redgion. Es un centro de innovación social y construcción de paz que facilita plataformas tecnológicas de apoyo a las organizaciones sociales y comunitarias.

Alma. Agencia de desarrollo económico rural, que caracteriza, fortalece y promueve las organizaciones de pequeños productores, el marketing territorial y el comercio justo con enfoque territorial.

Tejido humano. Es una organización focalizada en el trabajo con niños, mujeres víctimas y adulto mayor en la ciudad de Ibagué.

Unidos por el planeta. Es un centro de gestión ambiental participativa que promueve las reservas de la sociedad civil y la protección de cuencas hidrográficas, así como el pago por servicios ecosistémicos.

Acción política colectiva -APC. Es una plataforma multipartidista de buenas prácticas políticas que promueve la cualificación de la democracia a nivel local.

Instituto de desarrollo regional -IDER. Se centra en la construcción y gestión de alianzas territoriales y el fortalecimiento de capacidades.

Social Bank. Es una banca de inversión social que construye colectivamente mercados sociales a nivel local y rural y que promueve negocios responsables.

Tolipaz. Programa de Desarrollo y Paz, que se articula a la Red PRODEPAZ y que realiza actividades de apoyo a la sociedad tolimense.

Plataforma Sur. Organización que participa de procesos en 12 municipios del Tolima, así como en los departamentos del Huila, Caquetá y Meta. Formula, administra o coadministra, junto con organizaciones sociales, proyectos que desemboquen en procesos sociales para lograr el goce efectivo de derechos desde enfoques diferenciales.

Capítulo 4 Conclusiones

La historia de la guerra y la paz en Colombia se ha caracterizado por la coexistencia entre periodos de alta confrontación armada y coyunturas de negociación y diálogos de paz entre los actores en disputa. Durante los últimos treinta años Colombia ha vivido tres procesos de paz en periodos que, en promedio, han durado una década consiguiendo algunos avances en materia social y política como la constitución de 1991 pero al tiempo fortaleciendo los ejércitos en armamento, tecnología, inteligencia, capacidad operativa, número de unidades entre otros muchos factores que fortalecieron la guerrilla de las Farc-ep y el ejército colombiano durante los diálogos de Casa Verde en la Uribe, Meta y los diálogos del Caguán en el Caquetá; los diálogos de la Habana, Cuba parecen contar otra historia que genera la nueva expectativa de lograr el fin del conflicto, la paz duradera, la justicia, la verdad y la reparación.

El sur Colombiano es, en este contexto ya narrado, el eje de una amplia geografía de la guerra y la paz, allí el departamento del Tolima, por sus características históricas, naturales, culturales y agrarias logra ser un territorio nodal de conexión estratégica entre fronteras, corredores, ecosistemas y culturas que han poblado todas las regiones del Tolima con dinámicas diferenciales,

actores en conflicto armado, un estado irregular, segmentado y una amplia ciudadanía que construye iniciativas y propuestas que pueden ser la alternativa más regeneradora en el marco de un proceso de paz y una reforma al desarrollo social y económico del país, entre otros aspectos de la agenda para la terminación del conflicto entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos.

La geografía del Tolima y las dinámicas del conflicto analizadas en otros capítulos nos permiten identificar territorialidades que son decisivas para la guerra y la paz en Colombia, especialmente, por la presencia de los actores armados y las iniciativas de la sociedad civil que logran resurgir en las coyunturas de paz tras las graves afectaciones que ha traído la guerra a las sociedad civil colombiana. En este sentido la región Norte del Tolima ha tenido incidencia de orden paramilitar que ha logrado permear las instituciones, la economía y la cultura de los pueblos donde se han concentrado grupos como las Autodefensas de Córdoba – Urabá,

“Los Rastrojos” y el “Comando Niche” grupos de nuevos paramilitares o bandas criminales. La región de los Nevados como la región centro han sido focos de disputa de las fuerzas

en conflicto que se instalan e incursionan de acuerdo a sus capacidades y estrategias; en estas regiones el riesgo de la aparición de nuevos grupos criminales y el rearme de antiguas estructuras del paramilitarismo que entrarían a controlar el territorio y los corredores de las FARC-EP, lo que representa una amenaza latente para un proceso de desmovilización de la guerrilla y la construcción de paz.

La región sur y suroriente, aquella que bordea los límites de Cundinamarca, Huila y Cauca, ha estado en disputa permanente y control mayoritariamente de las FARC-EP desde el inicio de su historia como autodefensa y guerrilla comunista. Este territorio, escenario de los planes militares del Comando Conjunto Central de las FARC-EP y de la Política de Consolidación para la cordillera central y el plan espada de honor I y II del ejército colombiano lo sitúa como teatro de la guerra y, paradójicamente como escenario de paz. En sus antecedentes se cuentan historias de pactos y procesos de paz entre guerrillas y entre guerrillas e indígenas, también recibió el coletazo de las negociaciones del Caguán donde, según los pobladores, “se vivió como en zona de despeje” en municipios como Planadas, Chaparral y Río Blanco que son hoy objetivo de la política de consolidación territorial incluyendo a Ataco. La ciudadanía es la voz que logra identificar las brechas, estrategias y recomendaciones para un proceso de paz y posconflicto en Colombia.

Manifestaciones sociales frente al conflicto armado y los diálogos de paz

Durante el actual proceso de paz, se han promovido espacios de participación ciudadana independientes, que han convocado a públicos diversos y que se han realizado tanto en la capital del país como en los territorios, entre los encuentros que se realizaron caben resaltar los Encuentros Regionales de Paz promovidos por la RED PRODEPAZ, los Diálogos del Sur organizados por el PDP Huipaz y por supuesto los Foros organizados por la Universidad Nacional y el PNUD. En estos espacios existen propuestas recurrentes por parte de la ciudadanía que abordan temas de su interés.

Así las comunidades campesinas han insistido en la necesidad de viabilizar la figura jurídica de las Zonas de Reserva Campesina, que se encuentra estipulada en la ley 160, esto como una posibilidad de ejercer derechos territoriales y dar tránsito al reconocimiento de un espíritu político que se les ha desconocido. El reconocimiento de derechos territoriales y el ejercicio de la ciudadanía para los campesinos es un requisito indispensable para la consolidación de la paz desde el territorio.

La necesidad de ambientar la paz en los territorios de guerra mediante el cese bilateral al fuego, es una demanda constante de todas aquellas personas que viven en regiones de conflicto. El cese bilateral ambienta las posibilidades de paz en la región, da credibilidad local al proceso y promueve comprensiones culturales diversas a la bética para acordar soluciones a los problemas nacionales.

La ampliación de derecho y la garantía de cumplimiento a comunidades indígenas y negras, quienes aún gozando de la consulta previa, libre e informada, en ocasiones no son tenidos en cuenta para la planeación territorial y esto limita las posibilidades de construir país conjuntamente.

Apoyo al proceso de paz y a la salida negociada al conflicto armado

En las coyunturas de los procesos de paz en Colombia las posturas e iniciativas de los actores armados, económicos, políticos y sociales se debelen, se confrontan y se radicalizan, en general todos los actores y los sujetos políticos, desde partidos hasta ciudadanos no organizados, adoptan una postura sobre su apoyo o desacuerdo con el proceso de paz entre la guerrilla y el gobierno.

Los partidos políticos, por ejemplo, asumieron la paz y su proceso de negociación y construcción como una estrategia política para posicionarse en la escena política actual, así mientras el partido de la U y los liberales jugaron en sus lemas de campaña con la consigna del apoyo a la paz y al proceso de la Habana, los candidatos del centro democrático negaron la viabilidad del proceso de paz en las condiciones actuales. .

Esta es quizá una tendencia que se repite en muchos territorios del país: En Ibagué y otras urbes del departamento y el país (Cali, Medellín) la radicalización de las posturas ciudadanas y su rechazo al proceso de paz tiene mucho que ver con la posición privilegiada de no haber vivido en zonas donde la guerra repercute directamente, más ha pesado el imaginario que la industria cultural y los medios masivos han creado sobre la historia colombiana y sus profundos conflictos que solo se conocen mediante una suerte de telenovela de RCN o Caracol.

La ciudadanía principalmente campesina, estudiante e intelectual, trabajadora, popular y comunitaria ha acudido masivamente a los diferentes escenarios nacionales y locales que se han realizado desde diferentes iniciativas y organizaciones para apoyar y contribuir al proceso de Paz y la solución negociada. Vale la pena recordar por lo menos un par de sucesos: La convocatoria

para los foros regionales y nacionales de Participación Política y Reforma Rural Integral lograron generar una alta participación de delegados de todo el departamento que asistieron a las mesas regionales y nacionales propiciando el debate y construyendo propuestas para la terminación del conflictos, la participación y el desarrollo. Allí se destacaron las organizaciones campesinas representadas en las Juntas de Acción Comunal, las organizaciones agropecuarias: Cafeteras, Platanicultoras, pecuarias y las asociaciones departamentales como ASTRACATOL la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima quienes han apoyado decididamente los escenarios de movilización y discusión política.

Otro suceso, donde las organizaciones sociales del Tolima han sido centrales son las jornadas de movilización y protesta campesina que se gestaron desde el mes de octubre de 2012 reclamando una reforma agraria integral para Colombia y el apoyo al proceso de paz, esta jornada fue denominada la semana de la indignación que reunió a campesinos del Huila, Tolima y Caquetá en el sur límite del Tolima y el Huila. Posteriormente el Paro Cafetero de marzo de 2013 y la movilización de un millón de personas el 9 de abril en la ciudad de Bogotá dejaron en claro una importante postura de la ciudadanía Colombiana: El apoyo decidido y beligerante con el proceso de Paz y el fin del conflicto.

También es claro que en este juego de actores y correlaciones de poderes un sector minoritario y poderoso representado en el ex presidente Álvaro Uribe Vélez está utilizando la posición de finalizar los diálogos de paz e insistir en la derrota militar, una consigna de la seguridad democrática asumida y pregonada por sus candidatos y seguidores. Aquí radica la principal brecha del proceso de paz: la existencia de un sector político poderoso y minoritaria que posea las intenciones y las capacidades para ahondar un imaginario de radicalidad que termine agudizando el conflicto y la degradación de la guerra y los derechos humanos y el DIH. Es en este escenario donde los reductos de paramilitares, bandas criminales y ex guerrilleros existentes se convierten en un riesgo alto que puede desestabilizar un proceso de posconflicto y cese al fuego.

Desarrollo territorial sostenible para la paz

La tierra es el centro de la disputa en Colombia que tiene una cultura agraria y latinoamericana inmersa en un sistema de desigualdad y pobreza agudizada por la exclusión en el campo y la ciudad. La disputa no solo es en el campo de las armas sino también los conflictos por la tierra, la existencia de un modelo bimodal de la producción de la tierra donde coexiste el latifundio, el hato y la hacienda con los minifundios y microfundios de la inmensa mayoría de la población; los conflictos en este

sentido pasan por los terrenos de la política que ha tenido como expresiones históricas la radicalización y la violencia lo que ha desencadenado repertorios como el exterminio por motivos políticos como aconteció con los líderes de la Unión Patriótica en el Tolima y el resto del país.

La brecha más significativa en el proceso de paz parece estar en este punto: la negociación del Modelo, es decir el replanteamiento de la política de las locomotoras industriales sobre la economía campesina y el desarrollo local e interno. En el Tolima este conflicto por la tierra adquiere dimensiones superiores al sobreponer el mapa de la industria minero energética al mapa de la agricultura, la economía familiar y la producción campesina. El hermetismo sobre este punto parece dejar sin posibilidades de decisión sobre los asuntos estructurales que generaron el conflicto armado y que continuarán vigentes si no se replantea el modelo económico nacional. Debe saberse negociar en medio del fuego cruzado y de la implementación de políticas macroeconómicas como el TLC y la locomotora minero energética es un error estructura que amerita subsanar recomendando el cese al fuego y el detenimiento de la implementación de políticas económicas que afecten el campo colombiano, la producción de alimentos y las economías pequeñas, medianas y familiares.

En el Tolima existen iniciativas asociativas de pequeños productores y medianos productores que en conjuntos buscan entrar en los circuitos de comercialización nacional e internacional, entre estos los cafeteros del Sur y del Nevado han generado alianzas que les ha permitido exportar mediante

“...el trabajo conjunto de muchos cafeteros. Es que para poder competir a un grande que en el Brasil tiene uno solo por ahí 3000 o 5000 hectáreas de café, nos toca juntar 300 0 500 cafeteros de 1 ,2, 5 o media hectárea, hacer una gran finca y reunir la cuota para exporta a los compradores”⁶²

Estas iniciativas de las asociaciones campesinas van el la vía que plantean las recomendaciones de instituciones como la FAO o PNUD quienes han convocado a los países del mundo a celebrar en el año 2014 el año de la agricultura familiar por sus grandes aportes a la producción de alimentos y a la seguridad alimentaria mundial, aquí territorios como America Latina y específicamente Colombia, que son de vocaciones eminentemente agrícola y de características privilegiadas en sus suelos y climas adquieren una relevancia internacional que parece desconocerse por los industriales y gobiernos colombianos que prefieren continuar apostándole a la vieja formula de la economía de exportación en contraviniendo las posibilidades de ser potencia mundial en producción de alimentos y fuentes de hídricas y de oxígeno.

62 Testimonio de Caficultor en Rió Blanco – Tolima. 2013.

Estado Social de Derecho y Construcción de Paz

El departamento del Tolima está en mora de realizar una radiografía social y humanitaria de su situación real de vulnerabilidad a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y los derechos económicos, sociales y culturales donde se fundamenta el Estado Social de derecho y se cumple el mandato constitucional del pueblo colombiano como constituyente primario. Para ello se debe iniciar superando el paradigma de la seguridad democrática que justifica la victoria militar sobre la integridad de los derechos de las personas y sus colectivos, también renunciar al paradigma de la acción integral que percibe la labor social del estado como una estrategia de guerra contrainsurgente que tiene como fin eliminar los argumentos sociales y las bases poblacionales del “enemigo” para introducir los programas sociales del estado. La política de consolidación fundamentada en la acción coordinada e interagencial con nodos de dirección mayoritariamente militar resulta ser la principal brecha en el proceso de paz que tiene su talón de Aquiles en la negativa de un cese al fuego bilateral.

Al respecto algunos pobladores comentaban que:

“ mientras en la habana disque están hablando, aquí (en Planadas) se están disparando. Esta semana vino el ejército y bombardeó casi la semana completa casi de día y de noche tiro bombas. Después apareció que habían muerto 7 guerreros y cogido otros tantos. La profesora de la vereda me dijo que habían tumbado montañas enteras y los niños no habían podido bajar a la escuela...”⁶³

La construcción de paz y las garantías de existencia de un Estado Social de Derecho para por el fin del conflicto, el cese al fuego y la reintegración de los soldados a la vida civil con oportunidades integrales de resocialización y construcción de futuro. Estas decisiones tienen tanto de político como de económico que se revelaría si la ciudadanía conocieron de voces oficiales los costos que deja una operación militar como la narrada por la fuente, que deja tras su inversión el inhumano saldo de 7 personas muertas e invaluable daños naturales y emocionales a los habitantes del campo donde se vive y se escucha la realidad del conflicto.

La primera recomendación, valga la insistencia, es el cese bilateral del fuego. La segunda con el mismo grado de importancia y potencialidades son el reconocimiento, visibilización y fortalecimiento de las iniciativas de construcción de paz, convivencia, reconciliación, resolución alternativa de los conflictos y defensa de los derechos humanos y el DIH. En el departamento del Tolima existen experiencias de reconciliación

y figuras comunitarias que se han creado para la resolución de los conflictos locales, veredales y familiares esto, en gran medida por la ausencia social del estado, su alto nivel de vulnerabilidad poblacional frente al conflicto armado y la pobreza y una gran tradición organizativa. Es por ello que en muchas comunidades y JAC existen cargos como los conciliadores y figuras como los comités de conciliación, también cuentan con instrumentos de convivencia como los denominados manuales e convivencia donde se estipulan los acuerdos, logrados por asamblea, que de ben regular su vida social. Este tipo de experiencias que se sitúan fundamentalmente en el sur del Tolima son estrategias prioritarias para la construcción de una cultura de paz en el departamento y el sur colombiano.

Justicia transicional y derechos de las víctimas

Colombia vivió en años recientes un proceso fallido de justicia transicional con los paramilitares que se empezaron a desmovilizar desde el año 2003, allí no se logró más que extraditar algunos narcotraficantes que compraron grupos de hombres armados, muchos que hicieron presencia en territorios del Tolima causando daños irreparables a sus víctimas. De este proceso no quedó ni siquiera los relatos de verdad y de memoria que se han construido con las versiones de los victimarios con el agravante de la inoperancia de las políticas e instituciones encargadas de la reparación y atención a víctimas del conflicto armado. En el Tolima aún reina el silencio, el miedo a denunciar y la zozobra de las retaliaciones por reclamar tierras despojadas o denunciar a los victimarios y sus financiadores. Aquí radica la principal brecha de este punto: la inexistencia de una justicia transicional que garantice los derechos de reparación y restitución de la víctimas y las garantías de no repetición.

Muchos de los vacíos existentes se pueden rastrear en cinco temas centrales para los derechos de las víctimas y el fin del conflicto armado y el inicio de una paz duradera:

El despojo es una de las delitos más significativas en el departamento del Tolima, aunque, como se mencionó en líneas anteriores, las cifras estén lejos de representar la realidad del despojo en el departamento, lo cierto es que la crisis humanitaria de familias despojadas y desplazadas continua en crecimiento y los indicadores se elevarán con el paso del tiempo y la aparición de nuevas garantías para la denuncia y las solicitudes de ingreso al registro de tierras despojadas. Las fallidas experiencias de retorno de familias desplazadas y de restitución de predios despojados que ha traído nuevas violentaciones entre desplazamientos, amenazas y asesinatos ahondan el vacío que existe en este punto estratégico para la paz.

63 Testimonio dado en el Encuentro Regional por la Paz Huila – Tolima, 2014.

Violencia política

Ha sido el principal motivo de la violencia y el exterminio a expresiones políticas alternativas y de izquierda en el departamento y el país. Con la implementación de los diferentes planes militares especialmente en el sur del Tolima violaciones a los derechos humanos como la estigmatización, los señalamientos, las capturas masivas, el reclutamiento forzado, los asesinatos selectivos y las amenazas son factores de riesgo para la participación política y todos los escenarios que promuevan la participación de nuevas expresiones que incluso puedan a coger a los líderes guerrilleros que se deseen vincular a la vida política civil. Este vacío que habla de la ausencia de garantías de no repetición de casos como el genocidio de la Unión Patriótica dificulta la realización de un proceso de paz donde las voces de las víctimas puedan ser pieza fundamental en reconciliación del país.

Cultura de paz

Es la cultura de paz la única garantía para una paz duradera en Colombia. La larga historia de violencia ha desdibujado el imaginario de una sociedad en paz y coordinada en un proyecto de nación que busque el desarrollo humano integral. Quizá este es el principal riesgo del proceso de paz: la existencia de una

cultura de masas que niega las causas estructurales del conflicto, desconoce los orígenes de los actores y sus proyectos políticos y arrebató el estatus de beligerancia de una parte y de otra desprecia la autoridad de un estado en construcción, diverso y multicultural; este tipo de imaginarios pueden obstaculizar un proceso de refrendación donde el imaginario del guerrillerismo, impulsado por los sectores de la derecha más radical e intolerante, se sobreponga al imaginario de la paz de la sociedad civil. Para la configuración de una cultura de paz debe reconocerse las dinámicas de la guerra prolongada y las oportunidades históricas de construir consensos y acuerdos para el fin del conflicto, además de identificar las iniciativas ciudadanas y gubernamentales que pueden dar paso a procesos humanitarios en localidades, departamentos y regiones de Colombia.

Para ello la voluntad política de los actores económicos, políticos y militares es crucial para garantizar un imaginario de país que este dispuesto a desarmarse y a resolver los conflictos mediante procedimientos alternativos que no acudan a la violencia como repertorio para imponer un modelo económico o político o ideológico que termine desangrando a Colombia otros sesenta años contados después del armisticio de 1953 de las guerrillas de los llanos orientales de Guadalupe Salcedo, el negociador que, igual que Alfonso Cano, terminó siendo asesinado después de iniciar un proceso de diálogo para la paz.

Bibliografía.

ANUC, Documento virtual, fecha 20 de mayo de 2014 en <http://historiacolombiasigl.wix.com/anuc#!historia/cjg9>.

Atlas de distribución de la propiedad rural en Colombia. IGAC, Universidad de Antioquia, Universidad de los Andes. Bogotá. Imprenta Nacional. 2012.

BACA, Renzo. De la distribución de baldíos a la consolidación de una región cafetera: Dinámica comercial y estructuras agrarias en el Líbano – Tolima. 1866-1897. En Anuario Colombiano de Historia social y de la cultura.

BALCÁZAR, ÁLVARO; Vargas, Andrés & OROZCO, Martha Lucía (1998) Del proteccionismo a la apertura ¿El camino a la modernización agropecuaria?, Bogotá: CEGA

BAUTISTA, Sandra Carolina (2012) Alternativas analíticas de la movilización social en Colombia: la acción colectiva de alto riesgo. Lecturas a propósito de la protesta campesina en el Tolima, En: Estudios políticos, 41, Instituto de estudios políticos, Universidad de Antioquia, una Eduardo. La violencia en Colombia. Editorial Tercer Mundo, Bogotá, 1962.

BECHARA GÓMEZ, Eduardo, Coordinador académico y otros. ¿Prolongación sin solución?. Perspectivas sobre la guerra y la Paz en Colombia. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2012.

BEJARANO, Jesús Antonio y AVELLANA , Mauricio. Historia Económica de Colombia , Capítulo 5: El despegue Cafetero (1900-1928), visto en: <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/histecon/histecon6a.htm>. Agosto de 2013.

BOURDIEU, Pierre. “Le Capital Social”. en: actes de la recherche en sciences sociales. Vol 31, janvier. 1980.

Centro Nacional de Memoria Histórica, DPS. ¡Basta Ya! Colombia! Memorias de Guerra y Dignidad. Bogotá, 2013.

CALDERÓN, Gabriel. “El origen Jurídico del Líbano Tolima”. Biblioteca Libanense de Cultura. 2012.

ECHANDÍA CASTILLA Camilo y SANDOVAL BRITTO, Luis Yesid, La historia de la quina desde una perspectiva regional. Colombia, 1850-1882, (1986), Tesis de grado, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Externado de Colombia, Bogotá.

CASTILLO, Diego. El Indio Quintín Lame. Editorial Tercer Mundo. Bogotá, 1973.

CECOIN. “Paz y Resistencia: Experiencias indígenas desde la autonomía” Capítulo 2, los acuerdos de paz de 1996 en el resguardo Nasa Wesh municipio de Gaitania, Tolima. Primera edición, Bogotá, 2007.

Centro de Estudios Regionales del Sur y Corporación Nuevo Arcoiris, “Alcances y desafíos de la política nacional de consolidación nacional territorial en Colombia: Cordillera Central”. Documento Inédito. 2012.

Centro Nacional de Memoria Histórica/Mario Aguilera (relator), Guerrilla y población civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013, Bogotá, 2014, Capítulo 1,

Entrevista a Alberto Casas, Presidente de la Asociación de productores de café con fines ecológicos El macizo”, abril de 2010.

ESPINOSA RICO, Miguel Antonio. “Iguaima: El futuro posible”. Editorial Grijalbo. Colombia, 1996.

Estudio sobre la distribución espacial de la población en Colombia elaborado por Rocío Munrad para la CEPAL, Chile 2003

Estudios de mercado: Diagnostico del mercado del arroz en Colombia (2000 -2012). Superintendencia de Industria y Comercio. 2012.

FAJARDO MONTAÑA, Darío. “Espacio y sociedad: formación de las regiones agrarias en Colombia”. Corporación Araracuara. Bogotá 1993.

FAJARDO, Darío. Violencia y desarrollo: Transformaciones sociales en tres regiones cafetaleras del Tolima 1936 -1970. Fondo Editorial Suramérica. Bogotá. 1979.

Fedearroz, revista arroz Volumen 58 No 489, mes de Julio año 2010.

Federación Nacional de Cafeteros, series de datos disponibles en: http://www.federaciondefeteros.org/particulares/es/quienes_somos/119_estadisticas_historicas/

Federación Nacional de Cafeteros, series de datos disponibles en: http://www.federaciondefeteros.org/particulares/es/quienes_somos/119_estadisticas_historicas/

FLÓREZ, García . Diego Fernando. “Buscando a Gaitania”. Editorial: Caza de Libros. Ibagué. 2011

FORERO ÁLVAREZ, Jaime. Economía Campesina y Sistema Alimentario en Colombia: Aportes para la discusión sobre seguridad alimentaria. Bogotá, Diciembre de 2003. http://www.javeriana.edu.co/ear/d_des_rur/documents/campesinadoysistemaalimentarioencolombia.pdf

Fuente: UAEGRT. Serie de datos de información nacional disponible con corte a enero del año 2013.

GARAY SALAMANCA, Luis Jorge. Minería en Colombia, fundamentos para superar el modelo extractivista. Contraloría General de la República. Bogotá, 2013.

GONZÁLEZ, Fernán; GUTIÉRREZ, Omar; NIETO, Jaime; Et Al. Conflicto y territorio en el Oriente Colombiano. Cinep., Programa para la Paz, Colciencias, Odecofi., y DPS, Bogotá, 2012.

GONZÁLEZ, Fernán E. Poder y Violencia en Colombia. Colección territorio poder y conflicto. Bogotá 2014.

GONZÁLEZ VÉLEZ, María Eugenia (2012). “Colonización, memoria y resistencia. Construcción del territorio Yaguara II (Llanos del Yari, Colombia) desde el destierro”. En: Boletín de Antropología. Universidad de Antioquia, Medellín, vol 27, N 44.

GONZÁLEZ, José Jairo. “Espacios de exclusión: El estigma de las repúblicas independientes”1955 – 1965”. Colección Sociedad y Conflicto. CINEP. Bogotá. 1992.

González, Arias José Jairo. “La Violencia en el Huila” 1946 – 1966”. En Historia General del Huila. Vol. 2. Editada por Bernardo Tovar Zambrano. Neiva: Academia Huilense de Historia, 1996.

GONZÁLEZ ARIAS, José Jairo. Meta: De la Uribe a la Habana. Universidad de los Andes, DPS. Bogotá, 2014.

González, Fernán, Bolívar, Ingrid, Vásquez, Teófilo. (2003) Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado, Bogota, Cinep.

GOMEZ, Alarcón Carlos Camilo Ernesto. Tolima: Tierra Organización Social y Territorio. Centro Nacional de Memoria Histórica. Bogotá. 2014.

GOMEZ, Alarcón Carlos Camilo Ernesto. Participación Política en tiempos de paz: Monografía Tolima. Misión de Observación Electoral. Documento en edición.

GOMEZ Camilo Ernesto, RAMIREZ Erika, RESTREPO Andrés y otros. Incidencia política para el desarrollo y la paz: El aporte desde las organizaciones sociales del Tolima. Neiva, febrero de 2015.

GUZMÁN CAMPOS, German, FALS BORDA Orlando y UMAÑA LUNA,... La Violencia en Colombia. Editorial Tercer Mundo. Bogotá 1962.

Grupo focal realizado en el marco de la investigación Tierra, Organización Social y Territorio del Centro Nacional de Memoria Histórica, en la Unidad de Restitución de Tierras del Tolima, Abril del año 2013.

INCORA, 2001. Colombia Tierra y paz: Experiencias y caminos para la reforma agraria. Alternativas para el siglo XXI 1961 - 2001. p. 171. Bogotá, Colombia.

La Violencia en Tolima. Secretaria de Agricultura de 1958. Documentos 13. En Tolima Segunda Época, V 2, No. 1, Ibagué -Tolima, 1985.

LEGRAND, Catherine. Colonización y protesta campesina en Colombia 1850 -1950. Universidad Nacional, Bogotá, 1988.

MACHADO, Absalón, CASTILLO, Luis Carlos y SUAREZ, Isauro. *Democracia con campesinos o campesinos sin democracia*. Fondo DRI, IICA, Universidad del Valle. Bogotá, Abril 1993.

Machado, Absalón. (1998) La Cuestión Agraria en Colombia a fines del milenio, Bogotá, El Ancora Eds.

MEDINA, Medófilo. "La resistencia campesina en el sur del Tolima", en pasado y presente de la violencia en Colombia. Bogotá: CEREC. 1986.

NEIRA, Hugo. La agricultura en el Tolima. Manual de Historia del Tolima. Tomo III, pág. 319. Ibagué, 2007.

Observatorio de conflictos mineros de América Latina <http://www.conflictosmineros.net>

Observatorio de Derechos Humanos Presidencia de la república. "Diagnóstico del conflicto en el Tolima 2003 – 2007"

Observatorio Nacional de Paz. "Actores y dinámicas de la conflictividad territorial. Percepciones populares en cuatro regiones de Colombia". Planeta Paz. Corcas Editores. Bogotá, noviembre de 2012.

OQUIST, Paul, Violencia, conflicto y política en Colombia, 1978, Instituto de Estudios Colombianos, Bogotá,

Panorama Actual del Tolima, Vicepresidencia de la República, 2005, p. 19. Disponible en: http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/Documents/2010/Estu_Regionales/tolima2005.pdf

Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, Prosperidad para Todos: Más empleo, menos pobreza y más seguridad.

Programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2005, Panorama Actual del Tolima, Bogotá:

RAMIREZ & TOBASURA ACUÑA. "Migración Boyacense en la cordillera central, 1876 – 1945: Del altiplano cundiboyacense a los espacios de homogenización antioqueña". Bull. Inst. fr. Études. Adnines, 2004.

RAMIREZ, Jimenez. Erika. La organización social en el sur del Tolima. Documento inédito. Centro de Estudios Regionales del Sur. 2015.

Revelo-Rebolledo, J. E., & García-Villegas, M. (2009). Mayorías sin democracia. Desequilibrio de poderes y Estado de derecho en Colombia, 2002-2009.

Reyes, Alejandro. 1987. La Violencia y el problema agrario en Colombia. En:

Revista Análisis Político (2). Bogotá: Iepri, Universidad Nacional de Colombia.

Bogotá. Septiembre a diciembre.

Rincón, Jhon. J (2005). Trabajo, territorio y política: expresiones regionales de la crisis cafetera, 1990-2002. Carreta

RINCON, Jhon Jairo. De Café a Oscuro 2001.

RINCÓN, Jhon Jairo. Haciendas, Campesinos y cafetales. Aproximación a la producción cafetera en el Tolima 1860 – 2005, Manual de Historia del Tolima. Tomo II. Editorial Pijao, Ibagué, Tolima, Colombia. Abril del 2007.

RÍOS, Gerney, Arroz en el Tolima, pagina del municipio de Ambalema año 2009. Visto en Agosto de 2013.

ROPAIN y otros, 2007. P 128) ROPAIN, Gloria Viviana, RODRIGUEZ, Efraín, RUALES, Doris lucía, ROJAS, Jefereson.

Parque Nacional Natural Nevado del Huila: Plan Básico de manejo 2007 - 2011. Ministerio de Ambiente. Popayán. 2007

RUEDA PLATA, José Orlando. Historia de la población en Colombia (1880-2000). NHC. Bogotá, 1981.

SANCHEZ, Gonzalo, La Violencia: de Rojas al Frente Nacional, en Nueva Historia de Colombia Vol. II. Planeta Colombiana editorial, 1998.

SÁNCHEZ, Gonzalo. “Los Bolcheviques del Líbano (Tolima)”, Volumen 23 de Biblioteca Libanense de Cultura, Editorial Códice. 2009.

SÁNCHEZ, Gonzalo. “Los Bolcheviques del Líbano (Tolima)”, Volumen 23 de Biblioteca Libanense de Cultura, Editorial Códice. 2009.

SANTA, Eduardo. “Arrieros y Fundadores”. Edición Cosmo. Bogotá, 1961.

Sistema de Información Cafetera, Comité de Cafeteros del Tolima, 2013

Unidad de Restitución de Tierras <http://restituciondetierras.gov.co/?action=article&id=89>

URIBE, María Victoria. “Violencia y Masacres en el Tolima: Desde la muerte de Gaitán al Frente nacional”. Revista Credencial de Historia, edición 18, Junio de 1991. Bogotá, Colombia

VÁZQUEZ, Rafael (2001) Anotaciones sobre la política agraria colombiana periodo 1990-2000, Bogotá: Revista agronomía colombiana, 2001,

VÁSQUEZ, Teófilo y otros. Una vieja guerra en un nuevo contexto. Conflicto y territorio en el sur de Colombia. Universidad Javeriana. CINEP. Colciencias, Odecofi. Cerac., Bogotá, 2011.

TOLIMA

Análisis de conflictividades y construcción de paz

